

# EL SUR de CÓRDOBA

¿conflicto sin fin?



Asociación  
Nacional de  
Municipios



**incoder**  
Instituto Colombiano  
de desarrollo rural



**UNIVERSIDAD DEL SINU**  
Elías Socha Zúñiga  
Evolución y Liderazgo Regional

VÍCTOR NEGRETE BARRERA

El SUR de  
CÓRDOBA

¿conflicto sin fin?

## **El sur de Córdoba ¿conflicto sin fin?**

© Víctor Negrete Barrera

vicnegreteba43@gmail.com - Tel: 3008097402

**PNUD** - Carrera 15 Nro. 26-56 Tel: 7899900 - Montería

**Incoder** - Carrera 3 Nro. 5-34 Tel: 7925000 - Montería

**Fundación del Sinú** - Carrera 9 Nro. 40-55 Tel: 3008097402 / 7824278

**Universidad del Sinú** - Cra. 1W Calle 38 Barrio Juan XXIII - P.B.X. (4)7840340 Montería

**Fotografías:** Archivos Fundación del Sinú, medios de comunicación, Conchita Guerra, Ani Navarro G.

### **Diseño editorial:**

Analuz Navarro Gardeazábal - 311 411 5151

Diseño de ediciones - lanitanavarro@gmail.com

www.lanitanavarro.com

### **Armada electrónica, impresión y encuadernación:**

Editorial Siglo 21

Cra. 5ª N°. 31-24 Montería - Tel: 782 4997

e-mail: artes@editorialsiglo21.com ↪ gerencia@editorialsiglo21.com

administracion@editorialsiglo21.com ↪ www.editorialsiglo21.com

ISBN: 978-958-8553-21-4

© Abril de 2013

Impreso en Colombia - Printed in Colombia

## CONTENIDO

Presentación	5
Las Catas	
¿Ejemplo de un nuevo modelo de desarrollo rural?	7
¿Qué está pasando en Córdoba?	12
Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural ¿son las herramientas adecuadas para promover y fortalecer los cambios que anuncian para el campo?	18
Agua, conflicto y desarrollo en Córdoba y las “locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo”	25
¿Reforma rural transformadora en una región rica con conflictos armados y rurales?	37
Lo que sucede con Cerro Matoso no es nuevo	58
El sur de Córdoba: a la espera del Plan que acabe con el conflicto, la pobreza y el deterioro ambiental	67
El silencio de la violencia	85
En Santafé Ralito la vida sigue en mitad del caos	90
El sur de la Costa Caribe a la espera de tiempos mejores	99
El sur de Córdoba	
¿cuándo tendrá paz y desarrollo?	107

**LOS MUNICIPIOS DE TIERRALTA,  
VALENCIA, MONTELÍBANO, PUERTO  
LIBERTADOR, SAN JOSÉ DE URÉ, LA  
APARTADA, AYAPEL Y BUENAVISTA,  
ESTÁN SITUADOS EN EL SUR Y  
SURORIENTE DEL DEPARTAMENTO  
DE CÓRDOBA.**

## Presentación

**L**os municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, La Apartada, Ayapel y Buenavista, situados en el sur y suroriente del departamento de Córdoba, son conocidos por la violencia y pobreza que han padecido durante largos años. Son territorios ricos en biodiversidad, aguas, bosques, minerales, cultivos, ganadería, suelos y una geografía diversa. La gente de sus comunidades, la mayoría campesina (sin tierra, mini y microfundistas, jornaleros ocasionales, arrendatarios, medianeros, pequeños y medianos propietarios y/o productores), pescadores, mineros, artesanos, entre otros, soportan una gran presión por las difíciles condiciones de vida y la presencia permanente de grupos armados ilegales. En general son personas sencillas, amables, resignadas, tímidas, dispuestas al chiste y los cuentos, que aprendieron a sobrellevar el control impuesto por guerrilleros, narcotraficantes, delincuentes comunes y paramilitares de viejo y nuevo cuño, cada uno con su peculiar forma de pensar y el empleo de métodos para hacer el mayor daño posible a sus víctimas.

Estos pueblos, tan viejos como Ayapel, tan recientes como La Apartada, tan abandonados como San José de Uré, tan asediados como Buenavista, tan influenciados como Valencia, tan ricos en minerales como Montelíbano y Puerto Libertador y tan de malas como Tierralta que en nada le benefició ser el

lugar donde hubo el acuerdo de desmovilización entre el Gobierno y la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), esperan con paciencia franciscana que los gobiernos departamental y nacional los miren siquiera de reojo para atenderle algunas de sus principales necesidades. A nadie ha importado que en estos territorios y poblaciones haya nacido el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y sea considerada la casa paterna de las AUC. Sin olvidar que en los 60 años de historia del Departamento están los rastros imborrables de cuatro grupos guerrilleros liberales, cuatro grupos guerrilleros de izquierda, seis estructuras de las AUC, cuatro de los grupos de la posdesmovilización y varios de los narcotraficantes más poderosos que tuvo el país.

Debemos reconocer que las administraciones municipales, los gremios económicos, los grupos políticos, la institucionalidad privada y las empresas poco han hecho por el territorio y la población. Sorprende que las alcaldías, concejos municipales y Personería, entre otros, no hayan tenido la disposición y el interés por ayudar a solucionar tantas penurias. Indiferencia, falta de gestión, iniciativas y capacitación e indolencia han caracterizado a estos actores, contrario a lo que sucede en muchos otros lugares del país. En Córdoba, al parecer, mientras más pobres son los municipios más despreocupadas e ineficientes son las administraciones, según el decir popular.

Muchas comunidades y sus organizaciones, atosigadas por la escasez, la violencia y la fatalidad, están convencidas de que los cambios no son posibles y se aferran a la sobrevivencia y a la condición de subordinadas como la única manera de seguir viviendo. Para los que no estamos de acuerdo con estas apreciaciones el reto es demostrar con hechos y procesos que existen otras posibilidades y todavía hay razones para la esperanza.

Montería, abril de 2013

## Las CATAS

### ¿ejemplo de un nuevo modelo de desarrollo rural?

#### Antecedentes

Para muchos los nombres de Las Catas y Corinto, especie de predios siameses, están asociados a la lucha por la tierra en el municipio de Ayapel en Córdoba. Fue una lucha ardua que libraron los campesinos en 1973 cuando decidieron ocupar una porción mínima de esa inmensidad de miles de hectáreas de tierras ociosas o baldíos plétóricos de vegetación, agua y animales de caza. Bastó que los campesinos entraran a limpiar y sembrar para que aparecieran empleados o funcionarios con supuestos o reales títulos de propiedad, amenazas de hombres armados y piquetes de policía desalojando a los llamados invasores. Pocos recuerdan lo que sucedió esos días de ajeteo, gritos, escaramuzas, detenciones y golpes. Tal vez el caso que nadie olvida es el de Eduardo Mendoza por la crueldad del hecho que le tocó soportar. Lo contó David Sánchez Juliao en el libro *Historias de racamandaca* con el título de *El quemao de Corinto*. Los testimonios dicen que a Eduardo, “uno de los nuestros, a quien lo colgaron de aquella rama de totumo para quemarlo, acusado de haber robado una silla, un radio y un portamoneda con ciento cincuenta pesos, que nunca se robó... porque nos metimos a quitarle quinientas hectá-



reas de aquellas dieciocho mil que decían tenía Corinto”. El fuego, avivado por momentos, debajo de los pies de Eduardo hizo estragos en los pies y las piernas, los genitales y el bajo vientre que lo dejaron imposibilitado para siempre. Hoy, después de tantos años, no sabemos si todavía vive ni en qué condiciones. ¿Hasta qué punto estos hechos y otros similares, viejos y nuevos, junto con fracasos, esperas prolongadas, decepciones, engaños, amenazas y miedos influyen en el ánimo, disposición, credibilidad y esperanza de los campesinos, muchos desplazados y víctimas, que en la actualidad ocupan o no han ingresado todavía al predio Las Catas?

## Ubicación y algo de cronología reciente

El predio Las Catas pertenece al corregimiento Palotal, municipio de Ayapel. Está situado a 20 y 17 kilómetros de las cabeceras municipales de Ayapel y La Apartada respectivamente. Su área es de 4.672 hectáreas. Según cuentan algunos líderes el predio ha pasado por varios momentos: en 1986 figuraba como propietario Luis Galeano Berrío; lo explotaba la empresa Ganadería La Unión Limitada bajo la gerencia de José Botero Restrepo. En 1997 Luis Galeano compartía la propiedad con su pariente Rafael Galeano Zuleta. En el 2000 fue incautado por la Fiscalía 31 de Bogotá a los hermanos Moncada (José Francisco, William y Gerardo), reconocidos por sus actividades con el narcotráfico. En el 2004 pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), ya desaparecida. El mismo año la entregaron en administración a la Asociación de suboficiales retirados de Montería. En el 2005 por resolución 1352 del 14 de diciembre le fue asignado provisionalmente al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). En el 2006, 4 de julio, fue entregado mediante acta a 274 familias de campesinos sin tierra y campesinos víctimas del conflicto; meses después el Instituto les entregó resoluciones provisionales a título a la totalidad de las familias seleccionadas. En el 2012, 12 de enero, hizo presencia en el predio el presidente Juan Manuel Santos, quien lo entregó protocolariamente a las familias que lo ocupaban.

**“EL PREDIO CONTABA CON 2168  
HECTÁREAS EN PASTO, 1300 EN  
RASTROJOS, 1000 EN HUMEDALES  
QUE PERMANECEN INUNDADOS SEIS  
MESES AL AÑO Y 200 EN  
FORESTALES PROTECTORAS”.**

## El predio

En el acta de entrega del 2006, de acuerdo con el estudio técnico elaborado por el Incoder, “el predio contaba con 2168 hectáreas en pasto, 1300 en rastrojos, 1000 en humedales que permanecen inundados seis meses al año y 200 en forestales protectoras”. Es decir, un área piscícola, agrícola y ganadera, a la orilla del río San Jorge. Además, estaba la casa principal de dos plantas construida con bloque y cemento, una piscina, una pesebrera con diez divisiones, un casino para los obreros, un corral de varetas, ocho campamentos para trabajadores, planta eléctrica y motobomba, entre otros elementos de infraestructura. En el acta el Incoder “deja constancia que conforme al carácter de asignación provisional del predio, los asignatarios que lo reciben se comprometen a no establecer o implantar mejoras permanentes ni modificar el tipo de explotación que se viene adelantando, salvo el deterioro normal por su uso. No podrán instalar viviendas provisionales ni permanentes, por lo tanto no podrán asentarse permanentemente en los terrenos de la finca, la cual sólo se destinará como sitio o lugar de trabajo pero no de vivienda... De igual manera se establece la obligación de los asignatarios de devolver dentro del término señalado el predio a la DNE en caso el fallo judicial definitivo no declare la extinción del derecho de dominio y sea por ende favorable a sus actuales propietarios”.

## Los ocupantes

Las 274 familias seleccionadas llegaron de Ayapel, Tierralta, Montería, Montelíbano y Uré agrupados en 16 asociaciones. En la actualidad las ocho asociaciones de desplazados se fusionaron en una, la Asociación de desplazados unidos para un futuro mejor, mientras las demás están inactivas o suspendieron acciones. El número de familias que permanece estable en el terreno es de 130, dedicados a la ganadería en pequeña escala y a 30 hectáreas sembradas con arroz, yuca, plátano, ñame y patilla. Las familias de la parte baja, la inundable, cuentan con 55 viviendas provisionales por ser damnificados de la ola invernal. Algunos beneficiarios ausentes y otros presentes están vendiendo sus derechos o arrendando el pasto de sus parcelas a ocho mil pesos la hectárea mensual. Al parecer la tierra arrendada supera las 600 hectáreas. El Meridiano de Córdoba (14-1-13) informó que al área llegaron “terratenientes y ganaderos de Antioquia y Ayapel alquilando pastos para el ganado y después les hicieron firmar a muchos promesas de compraventa”. Todavía no poseen títulos de propiedad, no hay programas en ejecución y esperan los resultados de los estudios de suelos y aguas que adelantó una comisión el año pasado. El temor está presente, todos lo sienten aunque no lo manifiesten. Los líderes u orientadores cuidan sus palabras, calculan sus acciones, saben que hace menos de dos años hizo presencia un grupo armado ilegal, que el proceso del predio lleva a cuevas muertas, amenazados y desplazados. En fin, la esperanza que les generó el proyecto hace varios años terminará hecha pedazos si no les atienden con prontitud.

## Lo que significa el proceso

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Agricultura, Las Catas representa “la apertura de un proceso de desarrollo económico y convivencia social en lo que fueron escenarios del conflicto armado con fuerte presencia de narcocultivos”. La gerencia del Incoder estima que con este proyecto “arranca en forma la política de desarrollo rural que acompañará y complementará la de tierras que ya se inició y se verá dinamizada por la puesta en ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras”. Otros consideran que “es un proyecto piloto que busca integrar restitución de tierras y un nuevo modelo productivo basado en desarrollo rural con enfoque territorial”.

## Conocimientos, propuestas e historia

Un grupo de líderes han identificado los problemas y dificultades del predio; elaborado propuestas de solución o mejoramiento para los aspectos agrícola, pecuario, piscícola, forestal, ambiental, social y económico; tienen bosquejos de bandera, himno y escudo del predio y están empeñados en reconstruir su historia. Ya saben que en 1890 le llamaban El Playón y al supuesto dueño le decían Pitalúa. En 1900 apareció Ufracio Moreno como propietario, le cambió el nombre por Puerto Velo y aseguraba tener mil hectáreas. Fue él quien mandó construir el primer campamento; para atender a los trabajadores contrató una muchacha llamada Catalina y poco después para que le atendieran a la familia buscó a otra muchacha por casualidad con el mismo nombre. Por costumbre usual en la Costa, la gente empezó a llamar el lugar con la abreviatura cariñosa de Las Catas y así se quedó. Años después Ufracio le vendió a Marcos Salazar y este a su vez a una empresa no identificada con claridad que terminó quebrada y embargada por un banco. Los nuevos dueños ampliaron sus dominios con compras de fincas pequeñas aledañas hasta que le vendieron a Eduardo Uribe, este a los Boteros, quienes terminaron negociando con Luis Galeano. Para entonces el área de Las Catas alcanzaba las ocho mil hectáreas. Tres mil de estas eran montaña virgen en 1985.

En resumen: existen conocimientos, disposición y experiencias que deben tenerse en cuenta y valorarse al momento de definir proyectos, programas y políticas para el predio. Esperemos que así sea.

## ¿Qué está PASANDO en CÓRDOBA?

### Señales desapercibidas

El jolgorio de las celebraciones con la llegada del nuevo año opacó algunas señales de preocupación por la situación de pobreza, inseguridad e inequidad que vive el Departamento. Las autoridades, como es usual en estas y otras fechas, dijeron que el orden público estaba controlado y existía una relativa tranquilidad, sin entrar en detalles. En Montería y otras cabeceras municipales la percepción era más precisa: los medios de comunicación daban cuenta de uno u otro muerto sin indicar causas ni datos de los autores; muchas personas de distintos niveles y ocupaciones expresaban sus inquietudes en reuniones con amigos y familiares por la persistencia de robos, atracos, extorsión, fleteos y amenazas. Por conversaciones, encuentros fortuitos y llamadas telefónicas nos enteramos de hechos graves que suceden en el campo y no trascienden. En general, de acuerdo con los registros anotados, el Departamento mejoró sus índices de seguridad y bienestar respecto al año anterior. Lo más destacado para la prensa nacional fue el caso de los jóvenes encontrados decapitados, llamados los cabezas mochas, todavía sin esclarecer del todo.

## La presencia de la realidad

A mediados del mes de enero una serie de hechos violentos y amenazantes empezaron a sacarnos con brusquedad del letargo en que todavía nos encontrábamos. La lista, incompleta por supuesto, es la siguiente:

1. La incursión de un grupo armado ilegal desconocido en la vereda Santa Isabel del Manso en el alto Sinú, municipio de Tierralta. Con datos todavía incompletos los organismos de seguridad hablaron de desplazados, desaparecidos, heridos y un muerto.
2. El desplazamiento de campesinos e indígenas de los ríos Verde, Manso y Esmeralda hacia las cabeceras de Valencia y Tierralta.
3. Los constantes reclamos por inseguridad (ataques con piedras a conductores y pasajeros, quema de vehículo y ocupación de vías) de las empresas prestadoras del servicio del transporte público en Montería.
4. Invasiones a predios en varios lugares de Montería.
5. Amenazas a periodistas y docentes.
6. Los 25 homicidios aproximadamente ocurridos en enero, por encima del correspondiente al año anterior. Las autoridades aseguran que es producto de enfrentamientos entre bandas criminales y por lo tanto las investigaciones son más lentas de lo ordinario.
7. El peligro en que se encuentran los líderes de la restitución de tierras por amenazas de actores diversos opuestos al proceso, al tiempo que el gobierno les restringió o suspendió sus esquemas de seguridad lo que ha ocasionado deserción o desplazamiento en ellos.
8. El lanzamiento de una granada a una vivienda en Ciénaga de Oro con saldo de dos heridos.
9. La denuncia pública que hizo el coordinador de la Unidad de Restitución de Tierras, Rodrigo Torres, al indicar que “por falta de garantías no se ha comenzado el proceso de acompañamiento a las víctimas en los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano”. Sobre el particular el gobernador Alejandro Lyons agregó que “desde el año pasado dijimos y resaltamos que en muchos de los lugares donde se adelantan procesos de restitución había presencia de bandas criminales y delincuencia”.

10. El bombardeo al campamento a orillas del río Esmeralda en Tierralta donde se encontraba Luis Durango Úsuga, alias Jacobo Arango, jefe del frente 5 de las Farc y miembro del Estado Mayor Central.

11. El continuo aumento de violencia sexual.

12. La inconformidad manifiesta de mototaxistas, víctimas, desplazados y desmovilizados.

## ■ ¿En los puntos críticos qué sucede?

Uno de los varios puntos críticos de orden público que tiene el departamento es la olvidada y emblemática Zona de Ubicación en Tierralta, lugar donde adelantaron el proceso de negociación Gobierno-Autodefensas Unidas de Colombia que finalizó con la desmovilización parcial de las estructuras armadas ilegales. La Zona, con un área de 368 kilómetros cuadrados, estuvo conformada por los corregimientos Nueva Granada, Santafé Ralito, Bonito Viento, El Caramelo, Marta Gordal y San Felipe Cadillo. Para efecto del presente trabajo averiguamos la situación en que se encuentran los tres primeros, situados en el centro de la Zona.

Su población aproximada es de 2.870 habitantes. El agua que consumen no es potable, la toman de pozos de fincas o patios y no la hierven; sólo el 10% cuenta con letrinas; en Santafé Ralito hay un puesto de salud pero no todos los días asisten médicos y enfermeras; en Santafé Ralito y Bonito Viento funcionan los niveles de educación hasta el grado 11 y en Nueva Granada preescolar y básica primaria con un total de 1.170 estudiantes; no disponen de espacios recreativos y deportivos adecuados; las viviendas son con techo de palma, piso de tierra y paredes de tablas o bahareque, totalmente inseguras, por lo general son dos cuartos, sala y cocina, un baño afuera hecho con cualquier material que tape, lo que hace de puerta y el desagadero; las vías permanecen en mal estado, sobre todo en invierno; el 90% de los nativos no tienen tierra donde sembrar, así que la mayoría son jornaleros ocasionales y el resto la consigue arrendada, a medias o para domesticarla con una o dos cosechas de maíz, arroz o yuca y dejarla sembrada con pasto; los pequeños propietarios prefieren sembrar plátano; los pueblos, sean veredas o corregimientos, no tienen ninguna posibilidad de crecer porque están rodeados de fincas ganaderas que ni siquiera les venden la leche. Después de un receso largo están volviendo las

**LA ZONA, CON UN ÁREA DE 368 KILÓMETROS CUADRADOS, ESTUVO CONFORMADA POR LOS CORREGIMIENTOS NUEVA GRANADA, SANTA-FÉ RALITO, BONITO VIENTO, EL CARAMELO, MARTA GORDAL Y SAN FELIPE CADILLO.**



peleas de gallos, los campeonatos de fútbol y softbol y fiestas familiares; las visitas de familiares son escasas; de noche duermen un poco más tranquilos y los muchachos y muchachas pueden lucir modas raras sin temor a castigos. Desde finales del año pasado los habitantes de la Zona están sorprendidos con la llegada a El Caramelo de maquinaria, técnicos y obreros del interior del país. La sorpresa fue mayor cuando se enteraron que eran de la Empresa Colombiana de Petróleo, Ecopetrol, adelantando exploraciones en busca de petróleo. Mientras algunos esperan que ofrezcan empleos, mejoren algún servicio o apoyen iniciativas de la población, la empresa rehabilitó la carretera El Caramelo-Manta Gordal-Severinera, hizo mantenimiento a la de Santafé Ralito- El Caramelo y montó una base del ejército.

■ Aunque ya los muertos no son tantos, el miedo nos sigue acompañando

La Policía tiene puestos instalados en Santafé Ralito y Los Volcanes, el ejército patrulla con frecuencia y ahora tiene base en El Caramelo. El otro actor en la Zona son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En los pueblos mantienen entre cuatro o cinco miembros, casi siempre de la Zona o del Urabá antioqueño. Permanecen en casas de familiares, amigos, colaboradores o en fincas. Hacen labores del campo en motos y caballos; reciben quejas, resuelven problemas, controlan robos y conflictos entre vecinos; vigilan el comportamiento de la gente, las visitas y llegadas de extraños; expulsan a quienes consideran sospechosos o enemigos; ajustician a los traidores y enemigos que le hacen daño a la organización, como sucedió en Pueblo Cedro y Los Volcanes; en las noches patrullan con armas cortas y celulares y a cualquier hora y lugar hacen labores de reclutamiento, en los tres municipios por ejemplo fueron reclutados 16 muchachos en los dos últimos años.

El grupo se reúne con pequeños, medianos y grandes propietarios de tierras y negocios y líderes comunitarios tres o cuatro veces al año, dependiendo de las circunstancias. Por los grandes acuden los administradores de las fincas. Las reuniones usualmente las realizan de la siguiente manera: se presentan como organización, justifican por qué están en la ilegalidad, dan a conocer su plataforma política, aclaran sus nexos con otros grupos (diferencias y aproximaciones), servicios que ofrecen, lo interesante del trabajo comunitario, no se consideran narcotraficantes, reciben pagos o impuestos por protección o permitir

cultivos en los territorios que controlan, piden colaboración a los finqueros “para adelantar proyectos ante el gobierno para beneficio de las comunidades”, explican quiénes son sus enemigos, evitan causar muertes, advierten a las comunidades estar pendientes de personas extrañas y de “malandros de la comunidad”, piden que sean las organizaciones comunitarias las que denuncien ante ellos cualquier irregularidad, aseguran “tener presencia en todas las comunidades y estar informados de todo lo que pasa”, reconocen los hechos y acciones que cometen, los mandatarios donde tienen presencia cumplen con sus funciones, les brindan seguridad a las comunidades, están contra la corrupción, apoyan el desarrollo comunitario y la educación gratuita, la colaboración económica que solicitan no es vacuna ni obligatoria.

Por todo lo anterior la pregunta de muchos es: ¿qué está pasando en Córdoba?

## Los CONSEJOS Municipales de Desarrollo RURAL

¿Son las herramientas adecuadas para promover  
y fortalecer los cambios que anuncian para el campo?

### Hay cambios

**E**stamos de acuerdo: el campo, lo rural en otras palabras, empieza a recuperar su importancia después de largo tiempo de atropellos y desconocimiento. A pesar de lo polémico y peligroso que es hablar sobre tierra y desarrollo rural en el país, el interés por estos temas avanza con la aprobación de leyes, discusión de proyectos, organización de eventos masivos, apertura de oficinas de atención y reparación de víctimas y restitución de tierras, elaboración de estudios y análisis de miles de propuestas por los gremios, juntas de expertos, investigadores, líderes y los representantes del gobierno y las Farc reunidos en La Habana. Las propuestas son de todo tipo y alcance, la mayoría de ellas por fortuna alejada de los radicalismos de derecha e izquierda. Aun así, la oposición que despiertan en ciertos grupos y sectores preocupa y asusta.

## Preparando herramientas

El gobierno dice estar dispuesto a hacer realidad los cambios que promete y para ello prepara sus mejores herramientas. Una de ellas, fundamental, con la que aspira a ejecutar sus políticas y programas en los municipios son los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR). Estos, próximos a cumplir veinte años, fueron creados por la ley 101 de 1993, concebidos por las concepciones democráticas de la Constitución de 1991. La ley los define como “instancias superiores de concertación sobre asuntos considerados prioritarios para el desarrollo rural del país”. Y enfatiza que “en estos consejos la comunidad podrá decidir sobre la orientación, aplicación y priorización de los recursos de inversión pública nacional, departamental y municipal, debatir los problemas sociales, políticos, económicos y culturales así como concertar con el gobierno municipal y las demás instituciones del Estado las soluciones y los proyectos que promuevan el desarrollo rural, la organización social y la convivencia ciudadana”.

El gobierno nacional envió la primera directiva presidencial en junio de 1996 a los ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, gerentes y directores de establecimientos públicos nacionales, gobernadores y alcaldes, entre otros, para convocarlos a apoyar, impulsar y promover la consolidación de los CMDR o las instancias que hagan sus veces. La más reciente carta la firmó el ministro Juan Camilo Restrepo a mediados de 2011. Les solicitó a los gobernadores y alcaldes que creen e impulsen las instancias de concertación CMDR y los Consejos seccionales de desarrollos agropecuario, pesquero, forestal, comercial y de desarrollo rural (Consea), este último de la incumbencia de la gobernación.

## ■ El escenario ideal

Veamos cómo funcionaría un CMDR que cumple las funciones asignadas por la ley. A manera de ejemplo tomemos una reunión ordinaria, celebrada cada dos meses, del CMDR que participó activamente en la elaboración del Plan de desarrollo municipal. Están presentes a la hora fijada el señor alcalde, parte de su gabinete y el director de la Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria (Umata); funcionarios departamentales y nacionales que tienen que ver con el sector; con frecuencia participan representantes de la gobernación, el gobierno nacional, empresa privada, universidades y organismos de cooperación internacional. Hacen presencia todos los representantes de los grupos y sectores que conforman el CMDR, vinculados tanto a lo productivo como a lo social. Los directivos son líderes reconocidos, bien preparados, ordenados y responsables. El acta leída es precisa, bien elaborada, sin errores, recoge las exposiciones de los participantes, sus propuestas, discusiones, compromisos y plan de trabajo. Como todos o la gran mayoría conoce el Plan de desarrollo, los recursos y obras que contiene, la participación es amplia, documentada y crítica. Existe participación y control sobre la inversión. El gobierno municipal rinde cuentas de lo hecho, explica sus acciones, desaciertos, omisiones y los planes que posee. Todos son conscientes de la necesidad de evaluar y hacer seguimiento. Las preguntas, aclaraciones e inquietudes son numerosas. Al final, todos tienen la percepción que hubo avances, han tomado nota de lo importante y conversan con entusiasmo sobre determinados puntos. A pesar de las diferencias entre los sectores y grupos que asisten funciona la tolerancia, la superación de los conflictos y la firme disposición de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

## ■ Parece que la realidad es otra

Tengo entendido que muy pocos CMDR funcionan como el descrito anteriormente. La gran mayoría presentan fallas en cuanto a su composición, por lo regular predominan las acciones comunales y es notoria la ausencia de medianos y grandes productores, jóvenes, víctimas, indígenas, docentes, campesinos con y sin tierra, entre otros; no hay regularidad en las reuniones; las actas, sean de creación, reactivación o de reuniones no aparecen o están mal elaboradas; los directivos son personas desconocidas, sin la preparación y experiencias adecuadas, sin planes de trabajo ni vínculos de concertación con la administración municipal ni logros que mostrar, subordinados a los intereses de los grupos políticos locales.

Los cambios que están en marcha dependen de la existencia y capacidad de los CMDR en los municipios, el Consejo nacional de secretarios de agricultura (Consa) en el departamento y el Consa en la nación. En la mayoría de los departamentos los dos primeros no funcionan o no coordinan, quebrándose la articulación con el gobierno nacional.

Ante estos hechos surgen varias preguntas: 1. ¿Por qué el gobierno decidió que las herramientas más eficaces para impulsar los cambios en el campo son los CMDR y el Consea? 2. ¿El gobierno nacional evaluó la realidad de los CMDR y Consea en el país? 3. En caso que lo haya hecho ¿cómo piensa promover, crear o reactivar estas herramientas a corto plazo para que cumplan con seriedad las funciones que les corresponden? 4. Si en algunos lugares no es posible su creación o funcionamiento ¿qué organizaciones o instancias los reemplazarán?

## ■ El caso Córdoba

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) adelantan el proyecto Desarrollo rural integral con enfoque territorial en seis municipios del suroriente de Córdoba y seis del bajo Cauca antioqueño. Uno de los propósitos es averiguar hasta qué punto es posible adelantar procesos de desarrollo rural en comunidades pobres con presencia de conflictos rurales y armados como sucede en los municipios seleccionados.

MUNICIPIOS DEL SURORIENTE DE CÓRDOBA  
PROYECTO PNUD - INCODER

<b>MUNICIPIO</b>	<b>POBLACIÓN</b>	<b>ÁREA (KM<sup>2</sup>)</b>
Ayapel	48.324	1.929
Buenavista	20.809	847
La Apartada	11.926	268
Montelíbano	76.010	1.282
San José de Uré	10.514	518
Pto. Libertador	43.287	2.062
Total	210.870	6.906
Córdoba	1.632.167	25.020

**LA ENCUESTA.** Con el fin de indagar el grado de conocimientos sobre los CMDR que tenían las personas asistentes a las reuniones convocadas, adelantaron una encuesta en cuatro de los seis municipios con los siguientes resultados:

PREGUNTAS	AYAPEL			BUENAVISTA			MONTELÍBANO			LA APARTADA		
	ENCUESTAS: 29			ENCUESTAS: 22			ENCUESTAS: 26			ENCUESTAS: 9		
	SI	No	N/R	SI	No	N/R	SI	No	N/R	SI	No	N/R
1. ¿Sabe que son los CMDR?	21	6	2	17	4	1	18	7	1	8	1	0
2. ¿Sabe quiénes hacen parte de ellos?	18	6	5	16	4	2	19	6	1	8	1	0
3. ¿Sabe para qué sirven?	16	10	3	14	6	2	17	8	1	8	1	0
4. ¿Sabe que papel cumplen la Gobernación y el Incoder?	15	13	1	10	9	3	15	8	3	8	1	0
5. ¿Sabe que son el Consea y el Consa?	6	21	2	5	12	5	8	15	3	4	4	1
6. ¿Sabe cómo coordinan el Consea con los CMDR ?	1	23	5	4	14	4	4	19	3	6	3	0
7. ¿El Plan de Desarrollo Municipal contiene inversiones para proyectos agropecuarios?	14	6	9	15	4	3	19	1	6	8	1	0
8. ¿El CMDR participó en la formulación del Plan de Desarrollo?	10	5	14	8	6	8	12	6	8	7	2	0
9. ¿La organización, entidad o institución que usted representa hace parte del CMDR?	13	9	7	8	5	9	17	4	5	6	2	1
10. ¿Sabe que otras organizaciones, asociaciones o gremios hacen parte del CMDR?	10	13	6	10	9	3	17	7	2	7	2	0
11. ¿Sabe cada cuanto se reúne el CMDR en el municipio?	10	8	11	12	7	3	16	4	6	7	0	2
Municipio	AYAPEL			BUENAVISTA			MONTELÍBANO			LA APARTADA		
Total	134	120	65	119	80	43	162	85	39	77	18	4



De acuerdo con las respuestas a las preguntas 1, 2 y 3, la mayoría sabe que son los CMDR y quienes hacen parte de ellos. Incluso, dicen conocer para qué sirven pero no los utilizan y la prueba es que no se sabe de peticiones, proyectos o recomendaciones que hayan formulado a alguna institución u obras realizadas. Las respuestas a las preguntas 4, 5 y 6 indican que entre el 44% y el 76% de los asistentes no saben el papel que cumplen la Gobernación y el Incoder en cuanto al desarrollo rural ni la relación que tienen con el Consea y Consa. En las respuestas a las preguntas 7 y 8 la mayoría afirman que los Planes de desarrollo de los municipios si contienen inversiones en el sector agropecuario aunque aseguran que no participaron en su elaboración. Las respuestas a las preguntas 9, 10 y 11 muestran que aproximadamente el 50% de los encuestados no está enterado si la organización que representa hace parte de los CMDR, si hay otra u otras organizaciones que hagan parte de ellos ni cuándo se reúnen.

## ■ ¿Qué hacer entonces?

Con este balance queda claro que los CMDR de la zona no están en capacidad de ser las instancias de concertación que se necesitan para hacer frente a los cambios y oposiciones que estamos viviendo. Es urgente la adopción de un plan de reestructuración y fortalecimiento que involucre a la gobernación, las alcaldías, el gobierno nacional, las asociaciones de productores y de acción social, los gremios y los organismos de cooperación internacional. Hay algunos hechos a favor de este plan: existen cierto número de organizaciones activas, consolidadas y con logros a mostrar; algunas redes, aunque pocas, que cuentan con experiencias y deseos de superación e instancias oficiales, empresariales y religiosas que desde hace muchos años trabajan con organizaciones de base. Además de la voluntad política de los mandatarios y funcionarios, es de importancia vital contar con organizaciones fuertes, líderes y bases preparadas, con acompañamiento de gremios, iglesias y organismos de cooperación internacional. ¿Será posible en un departamento como Córdoba?

AGUA, conflicto y  
desarrollo en  
CÓRDOBA

y “las locomotoras para el crecimiento y la generación de  
empleo”

**E**l Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del actual gobierno dice que “las locomotoras de crecimiento son los sectores o actividades económicas que van a definir el rumbo que tome la economía colombiana en los próximos años...”. Enseguida añade, las cinco locomotoras identificadas por el gobierno son las siguientes: 1. Nuevos sectores basados en la innovación. 2. Agropecuaria y desarrollo rural. 3. Infraestructura de transporte. 4. Desarrollo minero y expansión energética. 5. Vivienda y ciudades amables.

¿Hasta qué punto estas “locomotoras”, en especial la agropecuaria y desarrollo rural y la minera y energética, ayudarán al desarrollo del departamento?, ¿podrán remover los obstáculos que hasta ahora lo han impedido?, ¿disminuirán la pobreza, el conflicto y la desigualdad?, ¿protegerán los recursos naturales y la biodiversidad?

## Razones para no estar optimistas

Por lo general en Córdoba falta información confiable y actualizada sobre estos temas, los grupos de estudios son escasos e inexistentes las oportunidades de análisis y discusión amplia y democrática. Por estas razones resulta difícil evaluar los grados de incredulidad y esperanza que tiene la gente. Acudo entonces a la historia, documentos oficiales, investigaciones académicas y experiencias de comunidades y organizaciones sociales para tratar de justificar por qué no estamos optimistas.

### **1. EL MANEJO DEL AGUA Y LOS BOSQUES**

a) Por tradición, desde hace 120 años aproximadamente, el agua y los bosques han sido considerados por numerosos ganaderos, agricultores y empresarios como obstáculos o recursos de poca importancia para el desarrollo de actividades económicas más rentables como la ganadería, agricultura y minería. Dos haciendas emblemáticas en la cuenca del río Sinú, Berástegui (1854-1890) de los Burgos en Ciénaga de Oro y Marta Magdalena (1882-1956), primero de franceses y después de antioqueños, entre ellos los Ospinas, en el sur de Montería, fueron los pioneros más conocidos. En la primera desecaron grandes extensiones de humedales a través de drenajes y diques para intensificar siembras y en la segunda arrasaron con bosques para sembrar cacao y después pasto.

b) Fue una empresa norteamericana, la George Emery Company (1883-1916), la que devastó los inmensos bosques que se encontraban al sur de Montería y en los cerros Las Palomas y Murrucucú. No lo hicieron para sembrar pasto ni cultivos, sino para exportar madera fina pero facilitaron estas actividades.

c) Después siguieron las políticas y programas de los distintos gobiernos. Un registro rápido nos permite reseñar lo siguiente:

- El trazado de algunas de las principales vías (Montería-Arboletes, Cereté-Lorica, Cereté-Ciénaga de Oro) interrumpieron la relación río-ciénaga.
- La ley 135 de 1961 identificó áreas adyacentes a los humedales para adelantar programas de reforma agraria, lo que permitió su reducción, deterioro o desaparición.



- La ley 9 de 1979 facultó a los alcaldes a drenar humedales cercanos a las cabeceras por considerarlos criaderos de vectores.
- El Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, permaneció en Córdoba 40 años (1963-2003), desecó cerca de 12.000 hectáreas de humedales en el Sinú medio; construyó dos distritos de riego (Montería-Cereté y La Doctrina en Lórica) que permanecen subutilizados; algunos de los procesos que adelantó sobre deslinde, clarificación de títulos, restitución y legalización fueron tan lentos, pasan de 20 años de trámite, que terminaron favoreciendo a los hacendados. No era extraño ver un potrero donde antes quedaba una ciénaga sin que los funcionarios se percataran.
- La resolución 10 de 1982 del Incora dispuso que los terrenos que conformaban la ciénaga Grande del bajo Sinú se dedicarían a programas de colonización.
- Con la tradición y el ejemplo de estas políticas y programas lo que siguió es fácil de suponer: ganaderos, grandes cultivadores, empresarios y políticos, entre otros pero con menos incidencia, comenzaron, en desafortunada carrera, a ocupar baldíos y ejercer dominio sobre los humedales que por naturaleza son bienes públicos. Desalojaron ocupantes con amenazas, engaños, papeles falsos, compras irrisorias, hostigamientos y daños a los bienes y a veces hasta con la misma autoridad. Así, cercaron, abrieron canales, hicieron obras de drenaje, levantaron terraplenes y desecaron numerosas ciénagas, quebradas, caños, pozos profundos y pantanos; taponaron, cambiaron y modificaron cursos de agua; cambiaron el uso de los suelos. Así también desplazaron y empobrecieron comunidades, disminuyeron drásticamente la capacidad de amortiguamiento de estas fuentes, destruyeron hábitat, ahuyentaron fauna, redujeron flora, cambiaron paisajes.
- Y todo esto lo han podido hacer porque se creen con el derecho y el poder, violan las normas legales y no ha habido autoridad municipal, departamental ni nacional capaces de frenar tantos abusos. Como prueba están la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental que protegen los recursos hídricos; la sentencia de la Corte Constitucional T-194 de 1999 para preservar los humedales del departamento y la Resolución Defensorial 038 de 2005 para “defender estos ecosistemas estratégicos, en particular de la cuenca media y baja del río Sinú, con el fin de garantizar los derechos humanos vinculados a su conservación”.
- A raíz de las grandes inundaciones sucedidas en Córdoba en los últimos años, directivos de la empresa Urrá S.A, funcionarios del gobierno nacional y

empresarios locales defienden la versión que solo con hidroeléctricas es posible controlarlas. Como Urrá I, con una potencia instalada de 340 megavatios y un embalse de 7.400 hectáreas resultó insuficiente para controlarlas, desde hace tres años insisten en construir Urrá II o Proyecto río Sinú que produciría 80 megavatios más pero el área a inundar sería de 53.000 hectáreas en territorio del Parque nacional natural Paramillo y parte del resguardo indígena de los Embera.

## Resumen

- El modelo basado en ganadería extensiva con detrimento de aguas, bosques y economía campesina , continúa. La vocación y condiciones de suelos con relieves bajos, inundables, aptos para otras actividades productivas terminarán convertidos en pasto como ha venido sucediendo si no hay un cambio de mentalidad, intereses y modelos de desarrollo más equitativos. Córdoba tiene un área de dos millones y medio de hectáreas, de las cuales el 64% está dedicado a la ganadería. El hato ganadero ha disminuido en los últimos años. En la actualidad llega a 2.104.000 cabezas de ganado de acuerdo con el ciclo de vacunación.

- A pesar de las normas existentes y el rechazo de la mayoría de la población no se ha podido evitar la continua desaparición de los humedales ni el apoderamiento ilícito de estos ecosistemas.

- Según estudios de la Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge (CVS) en 2004 y 2005 el área ocupada por los humedales de las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge fue de 27.695 hectáreas en verano y 38.546 hectáreas en invierno, cuando años atrás el área cubierta era de 110.000 hectáreas en época de lluvia. Es decir, desaparecieron 71.454 hectáreas. De aguas subterráneas la pérdida debe ser enorme pero carecemos de información confiable.

- En cuanto a los bosques el departamento únicamente conserva 10.000 hectáreas de mangle en la desembocadura del Sinú, el 75% de bosque denso del Parque nacional natural Paramillo, con 492.225 hectáreas, el 72.8% en Córdoba y el resto en Antioquia y escasos relictos de bosque seco tropical en los municipios de Canalete y Los Córdoba que no pasan de 700 hectáreas. El Parque enfrenta serias amenazas: la construcción del proyecto Río Sinú o Urrá II, los cultivos de uso ilícito, las fumigaciones, la permanencia y enfrentamiento entre grupos armados ilegales y la fuerza pública, la tala ilegal y las solicitudes y títulos mineros concedidos en territorios cercanos.

## Preguntas

¿Las “locomotoras” recuperarán los ecosistemas intervenidos y despojados?, ¿evitarán su deterioro y apoderamiento ilegal?, ¿les reconocerán su carácter de bienes públicos?, ¿protegerán el Parque ante tantas amenazas?, ¿resolverán rápidamente los procesos de tierras y humedales que dejó el Incora y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) no han resuelto todavía?, ¿elaborarán modelos de desarrollo que beneficien a pequeños y medianos productores?, ¿apoyarán y aplicarán el Plan departamental de prevención y atención de emergencias?

## 2. LAS LECCIONES DE LA HIDROELÉCTRICA URRÁ I

Después de 11 años de funcionamiento el balance es desfavorable para los indígenas Emberas que hoy están divididos y debilitados en su cultura; la pesca sufrió cambios drásticos: disminuyeron los volúmenes de captura, pérdida de áreas de desove en el lugar de la presa, el fraccionamiento de la cuenca, afectó el proceso reproductivo de las especies migratorias, los grandes estanques en el alto Sinú no han dado los resultados esperados, cambio irreversible en la dinámica del río, aceleramiento de la erosión, inconformidad de los reasentados; desplazamiento, empobrecimiento y cambios en actividades socioeconómicas y culturales de gran número de comunidades y sectores ribereños, en especial los del bajo Sinú. Al parecer esta situación ha influido en la presencia de grupos armados ilegales en la zona y la participación de pobladores en ellos como nunca antes se había visto.

## Resumen

Además de generar energía y controlar parcialmente las inundaciones los efectos negativos de la represa son evidentes y no deben ignorarse desde ningún punto de vista para bien del departamento. Insistir en construir la nueva represa en un parque de gran importancia hidrogeográfica, histórico cultural y biogeográfico causará un daño irreparable a nuestra sociedad que no podrán reponer con los beneficios económicos que les proporcionará el negocio de la energía. Es más, hagan o no este proyecto, la conservación y rehabilitación de los ecosistemas es una necesidad vital y urgente. Antes de tomar la decisión el Consejo de Estado, donde está radicada la demanda de los que defienden su construcción una vez el Ministerio del Ambiente les negó la solicitud de licencia ambiental, los cordobeses opuestos al proyecto están empeñados en adelantar conversaciones con los sectores interesados sobre su conveniencia o no. Cualquier tipo de negociación al respecto debe tener en cuenta los cambios que está generando el calentamiento global, el fenómeno de la niña, la experiencia de Urrá I y otras hidroeléctricas, el desarrollo del departamento y el bienestar en general de los cordobeses.

## Preguntas

¿Las “locomotoras” sobre qué bases tomarán la decisión de apoyar o no este proyecto?, ¿permitirán su construcción en el parque y por consiguiente abrirían la puerta para que la deforestación, los cultivos de uso ilícito y la minería legal e ilegal, sobre todo la que emplea grandes maquinarias, terminen poniendo en peligro su integridad?

### 3. EL MODELO QUE ESTÁ EN MARCHA

Al modelo basado sobre la ganadería extensiva y la agricultura campesina (productos de pancoger, frutas y hortalizas) y la comercial tradicional (algodón, arroz, maíz) lo han complementado con los cultivos forestales, agroindustriales, transgénicos y agrocombustibles y la gran minería legal e ilegal. Hasta el año pasado había 18.288 hectáreas sembradas con especies introducidas (teca, acacia, melina y eucalipto) y 5.756 hectáreas con especies nativas (roble, caoba, ceiba, campano y abarco). Los efectos de las especies introducidas sobre la biodiversidad son negativos y sobre el suelo y el medio ambiente son discutibles a mediano y largo plazo. Al tiempo avanza el área sembrada de algodón y maíz transgénicos en el Sinú, cacao y caucho en el San Jorge y la



palma aceitera en el distrito de riego La Doctrina, en Lórica. En agricultura los productos más significativos son algodón, arroz, maíz, plátano, yuca, ñame, cacao, caucho, papaya y marañón. A pesar de representar el 5.4% del área total departamental, en comparación con el 64% de la ganadería, en el 2009 el producto interno bruto fue superior al de este último (838 mil millones de pesos y 861 mil millones de pesos respectivamente), seguido por servicios con 773, comercio con 566 y hoteles y restaurantes con 479 mil millones de pesos.

Respecto a los minerales están el ferroníquel de Cerro Matoso en Montelíbano, el carbón de Puerto Libertador donde construyen una carboeléctrica y el oro en Puerto Libertador y Ayapel. La dimensión de la explotación que hace la gran minería legal e ilegal queda reflejada en el informe de resultados de la Operación Troya contra las llamadas Bacrim que opera desde enero pasado. Según el informe, las autoridades que participan en la Operación (Policía, Armada, Ejército, DAS) intervinieron 94 minas, capturaron 347 personas, cerraron 80 minas y decomisaron 87 retroexcavadoras, 102 motobombas, 8 plantas eléctricas, 45 dragas y 28 motores.

## **Resumen**

El aumento progresivo del área sembrada con especies forestales introducidas debe ser motivo de una amplia discusión sobre sus ventajas y desventajas. Estas especies son exportadas o procesadas fuera del departamento. Otros productos como maíz, yuca, algodón, marañón, cacao, palma de aceite y caucho son y serán procesadas en otros departamentos, convirtiendo a Córdoba en departamento productor de materia prima. Significativo que la agricultura supere el producto interno bruto de la ganadería a pesar de la extraordinaria diferencia en áreas ocupadas. Existen varios informes sobre no pago de impuestos y contaminación de la empresa Cerro Matoso y el enorme daño ambiental que produce la explotación de oro en el alto San Jorge y Ayapel.

## **Preguntas**

¿Las “locomotoras” podrán replantear el uso del suelo, desestimulando las tierras ociosas y la ganadería extensiva a favor de la agricultura?, ¿facilitarán los medios para que productos agrícolas, pecuarios y forestales se procesen en el departamento?, ¿controlarán los daños que ocasiona la gran minería legal e ilegal?

## 4. LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA

### LA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL

PROPIETARIOS	RANGO HECTÁREAS	NÚMERO DE PREDIOS	NÚMERO DE PROPIETARIOS	%	HECTÁREAS	%	PRINCIPAL USO
PEQUEÑOS	<1	24,727	26,515		5,869		Hortalizas y patios productivos
	1-3	13,055	14,575		23,468		Agricultura tradicional o arrendada para agricultura comercial
	3-5	9,017	10,658		34,373		
	5-10	14,269	17,345		100,639		
			61,068	69,093	58,18	164,349	7,15
MEDIANOS	10-15	8,400	10,594		101,201		Ganadería pequeña y mediana escala, especies menores
	15-20	5,282	6,873		90,835		
	20-50	12,366	16,992		381,975		
	50-100	5,532	7,987		382,352		
			31,580	42,446	35,74	956,363	41,64
GRANDES	100-200	2,868	4,513		382,627		Ganadería extensiva en un 80%
	200-500	1,308	2,104		385,710		
	500-1000	248	457		166,528		
	1000-2000	76	117		96,357		
	>2000	20	27		144,487		
			4,520	7,218	6,08	1.175.709	51,21
TOTAL PROPIEDAD RURAL		97,168	118,758		2.296.201		
TOTAL PROPIEDAD URBANA Y OTROS					205,799		
TOTAL ÁREA DEPARTAMENTAL					2.502.000		

Fuente: Cifras tomadas de IGAC 2003 y Secretaría de Desarrollo Económico

Nota: No sabemos cómo maneja el IGAC el área del Parque Paramillo porque no lo menciona.

## Resumen

Cada vez es más reducida el área de los pequeños propietarios y crece el de los medianos y grandes; aunque no está actualizada, los datos sobre tenencia y uso de la tierra ofrece información suficiente para acordar programas y políticas que beneficien en especial a los sin tierra y a los pequeños propietarios; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, tiene actualizado el catastro en un 90%; la concentración de la tierra se aceleró en la última década, proceso que persiste en el presente.

## Preguntas

¿Las “locomotoras” evitarán que siga concentrándose la tierra a costa de pequeños y medianos propietarios?, ¿redistribuirán la propiedad rural?, ¿tienen propuestas para los campesinos sin tierra y pequeños propietarios y productores?

## 5. EL CONFLICTO

La historia del departamento está marcada por la presencia y acción sucesiva e ininterrumpida de grupos armados ilegales desde antes de ser departamento en 1952. Primero fueron las guerrillas liberales de Julio Guerra, Mariano Sando, Evaristo Calonge y otros; siguieron las guerrillas de izquierda: Ejército Popular de Liberación, FARC, Partido Revolucionario de los Trabajadores y la Corriente de Renovación Socialista; apareció Fidel Castaño con sus “Tangueros”, por el nombre de su finca Las Tangas, cerca a Montería; prosiguió con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Cuando el proceso de desmovilización, 2003-2006, actuaban en el departamento los siguientes grupos de las AUC: Casa Castaño, Córdoba, Héroes de Tolová, Mineros, Montes de María y Elmer Cárdenas y por las FARC los frentes 5, 18, 58 y una columna móvil. Antes de la desmovilización total ya estaban operando los grupos Los Traquetos y Vencedores del San Jorge que más tarde dieron vida a Los Paisas y Urabeños con la posterior incorporación de Los Rastrojos.

Uno de los índices del paso de estos grupos por la geografía del departamento es el número de muertos que han ocasionado: en el 2005 hubo 158 homicidios, 253 en el 2006, 366 en el 2007, 512 en el 2008, 569 en el 2009, 575 en el 2010 y 489 hasta el 11 de noviembre del presente año, de acuerdo con el

Observatorio del Delito de la Gobernación de Córdoba . Según el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, la cifra llegó a 490 el 26 de octubre. Los municipios con más número de homicidios: Montería 94, Montelíbano 76, Tierralta 60, Puerto Libertador 40, Planeta Rica 29, Cereté 22. La Apartada 20, Lorica y Ayapel 19.

Hay operaciones en gran escala por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta en el Parque Paramillo contra las FARC y la Operación Troya que llevan a cabo en todo el territorio departamental contra las llamadas Bacrim desde el mes de enero. De acuerdo con el informe de esta última han desarrollado 555 operaciones, 1.101 capturas, 47 sometidos a la justicia, 11 abatidos en combate, 784 armas decomisadas, lo mismo que municiones y 239 granadas de fragmentación. Además han destruido 98 laboratorios, inmovilizados 93 vehículos y decomisados 18.046 kilos de clorhidrato de cocaína, 2.734 kilos de pasta de coca, 151.691 kilos de insumos sólidos, 90.949 galones de insumos líquidos y 567 kilos de explosivos. Erradicaron manualmente 5.926 hectáreas de cultivos de coca y por aspersión 12.669 hectáreas, el 29.1% en el Córdoba y el resto en Antioquia.

## **Resumen**

A pesar de la ofensiva militar contra las FARC y Bacrim y los diez concejos de seguridad celebrados en el último año en distintos lugares del departamento con presencia del Presidente de la República, ministros y cúpula militar la influencia de estos grupos no cede. No dejan de suceder los desplazamientos masivos, masacres, amenazas, extorsiones, reclutamientos y en general la inseguridad ciudadana.

## **Preguntas**

¿Las “locomotoras” qué proponen, distinto al aumento del pie de fuerza, para disminuir la violencia y los conflictos en el departamento?, ¿cómo garantizarán la seguridad a quienes les restituyan sus tierras?, ¿qué balance ofrece el Centro de Coordinación de Acción Integral en los lugares de conflicto donde opera?, ¿qué piensan hacer con la Operación Troya?

## **6. VISIÓN REGIONAL**

La relación de Córdoba con el departamento de Sucre, las zonas de los Urabá antioqueño y chocoano, bajo Cauca, sur de Bolívar y La Mojana es histórica, social, cultural, económica y ambiental, acompañada del conflicto armado durante mucho tiempo. En este territorio de enorme importancia estratégica por su ubicación y recursos, Montería ha venido convirtiéndose en un centro subregional clave para el desarrollo, mientras Córdoba sigue siendo un escenario de disputa y muerte.

### **Resumen**

Los mandatarios elegidos en Montería y Córdoba no hacen mención alguna sobre esta realidad. Tampoco lo han hecho nunca los grupos políticos, gremios económicos, academia y organizaciones de la sociedad civil. Sergio Fajardo, gobernador electo de Antioquia, reconoció que el Urabá antioqueño también es costeño y anunció su propósito de costeñizarlo, lo que sin duda traerá nuevos cambios para esta región que aún no ha sido vislumbrada como tal a pesar de su evidencia.

### **Preguntas**

¿Las “locomotoras” como conciben el desarrollo en un territorio como el aquí planteado?, ¿los mandatarios elegidos, dirigentes y líderes de este territorio tienen en sus planes una visión regional?, ¿qué hacer para llamar su atención?

### **FUENTES**

- Banco de la República.
- Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú.
- Dane. Córdoba, Informe de coyuntura económica regional, 2010
- Fundación del Sinú.
- Parque nacional natural Paramillo
- Policía Nacional. Operación Troya. Montería, octubre 2011
- Secretaría de Desarrollo Económico. Gobernación de Córdoba, 20011.

¿Reforma RURAL  
transformadora en una  
REGIÓN rica con  
CONFLICTOS  
armados y rurales?

Una región evidente

Los departamentos de Córdoba, Sucre, Chocó y las zonas Urabá antioqueño, bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar conforman una región, aún no reconocida, con fuertes y viejos vínculos a la que hemos llamado Interoceánica biodiversa. El conocimiento del territorio, su poblamiento, el uso de los recursos, la movilidad, las relaciones y parentescos establecidos demandó tiempo, laboriosidad y creatividad, sin faltar las hostilidades y desacuerdos. A pesar de tantas posibilidades de asociación e integración que tenían, al final, el territorio, único en su diversidad, fue fragmentado en entidades territoriales diferentes y a veces divergentes. Las autoridades y diversos grupos de poder, teniendo en cuenta sus concepciones e intereses, fomentaron las identidades particulares de las llamadas “patrias chicas” o localidades de cada quien, circunscribiendo sus simpatías, orgullos y compromisos a territorios y poblaciones específicas (veredas, municipios o departamentos),

en especial los lugares de nacimiento. Sin duda, algo importante y necesario si crea unión, innovación, bienestar, convivencia, ayuda mutua y sobre todo visión regional. Muchos de ellos lo hicieron con la intención expresa de diferenciarse, manejar mejor y durante más tiempo el poder que ya poseían y aprovecharse de los recursos y bienes de los otros sin invertir en su desarrollo. Así, los vínculos físicos, económicos, sociales, ambientales, culturales, administrativos y políticos fueron debilitándose hasta quedar convertidos en lazos precarios y coyunturales.

**CÓRDOBA, SUCRE, CHOCÓ Y LAS  
ZONAS URABÁ ANTIOQUEÑO,  
BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO Y SUR  
DE BOLÍVAR CONFORMAN UNA  
REGIÓN QUE HEMOS LLAMADO  
INTEROCEÁNICA BIODIVERSA.**

El propósito de conformar e integrar la región viene de mucho tiempo atrás.

1. Los cronistas españoles nos contaron que los indígenas de la época dividieron el territorio en tres provincias: Fincenú, que correspondía al actual valle del río Sinú; Panzenú a la hoya del río San Jorge y Cenufana a los valles del bajo Cauca y río Nechí.

2. En los territorios que hoy ocupan Turbo y Necoclí, los españoles levantaron las primeras poblaciones San Sebastián de Urabá y Santa María la Antigua del Darién en los primeros años de 1500. Después siguieron con Panamá, Santa Marta, Cartagena y Tolú.

3. La Provincia de Cartagena la conformaron con el territorio comprendido desde Bocas de Ceniza en la desembocadura del río Magdalena en su margen izquierda hasta la provincia del Chocó, incluyendo el Urabá antioqueño, Darién y Panamá.

4. La hacienda como estructura económica y social es un producto de la región. Desde su creación en el siglo 16 hasta el presente ha determinado la vida económica de la población, su vida social, así como su cultura e idiosincrasia. Las haciendas más antiguas aparecieron en cercanías de Cartagena, Mompós y Tolú y aunque al principio eran agrícolas con el tiempo las convirtieron en hatos ganaderos. Así se explica el nacimiento y desarrollo de la producción campesina en predios personales o familiares, el pan coger. En otras palabras la finca campesina costeña con sus productos emblemáticos como plátano, yuca, ñame, arroz, maíz, sembrada de frutales, maderables, plantas medicinales, aromáticas, ornamentales y hortalizas, cría de animales domésticos, de carga y mascotas, represa y algunas reses.

5. Desde mediados del siglo 18 las autoridades españolas estaban empeñadas en racionalizar y centralizar el control estatal y reordenar el agro mediante composiciones de tierras y congregaciones de habitantes. La primera misión para llevar a cabo este propósito la encomendaron a Antonio de la Torre y Miranda, quien durante cuatro años y medio (1774-1779) fundó y refundó 43 poblaciones, con 7.383 familias integradas por 41.108 personas, situadas entre el sur de Cartagena y Montería. La congregación de estos pueblos fue



atendida de manera múltiple. No se limitó a recoger familias dispersas, mudar vecindarios, ampliar o reordenar asentamientos establecidos o crear nuevas poblaciones. Además, asignaban ejidos para labranzas comunitarias, enseñaban cómo preparar sementeras y cultivar algodón, maíz y añil en forma técnica, fomentaban la cría de animales vacunos y domésticos, incentivaban las artesanías tradicionales como la alfarería y los tejidos en la elaboración de hamacas, mochilas, sombreros y esteras, abrían caminos para la comunicación y el comercio con los pueblos vecinos.

Estudiosos de la obra de Antonio de la Torre están de acuerdo que sentó las bases de una transformación económica y social regional, con una especie de reforma agraria popular inducida por una sustancial redistribución de la tierra accesible, según apreciación de Orlando Fals Borda. Su labor no finalizó aquí. Después fue comisionado para reducir, sin extinguirlos, a los indios Cunas del Darién que mantenían malas relaciones con los españoles y mejores con ingleses y franceses. Producto de sus viajes por la zona quedaron varios mapas y proyectos. Uno de estos fue sobre el establecimiento de cuatro poblaciones desde Lórica hasta el golfo del Darién o Urabá con el propósito de facilitar el tránsito al mar del Sur u océano Pacífico, presentado al virrey Manuel Antonio Flórez en julio de 1778 y el mapa de la antigua Provincia de Cartagena con poblaciones y caminos elaborado en 1777.

6. La segunda misión la adelantó el padre franciscano Joseph Palacios De la Vega en su campaña de evangelización y congregación de pueblos de la provincia de Cartagena entre 1787 y 1788. En su Diario de viaje, un documento conmovedor y humano, a veces dramático, simpático y chocante, dejó consignado todo cuanto vivió y sintió en sus relaciones con los grupos de indios y negros, clérigos, autoridades corrompidas, contrabandistas y una gran información sobre creencias y costumbres sorprendentes. Rindió un informe detallado sobre la reducción de los indios de San Cipriano y la destrucción de las rochelas de los ríos San Jorge, Cauca, Nechí, Tenche y Porce. En los numerosos sitios donde estuvo cumpliendo su labor mencionó los siguientes: Ayapel, Carate, Gegua, Tacaloa, San Cipriano, Uré, Mojana, Caño Barro, Boca de Perico, Catas, Mogotes, Lorenzana, Boca Segebe, San Matias.

7. En este proceso de configuración de la región, las trochas o caminos rudimentarios, peligrosos y solitarios jugaron un papel importante. Gracias a ellas se fueron estableciendo relaciones, vínculos de distintos tipos y muchas fueron el inicio de futuras carreteras. Contribuyeron con ellas los esclavos fugados de

minas y otros lugares de trabajo, campesinos sin tierras, colonos, buscadores de maderas, pieles, caza, tagua, raicilla de ipecacuana, caucho, contrabandistas, comerciantes, aventureros, brujos, curanderos y de los “viajes” de ganado. Los primeros traslados de ganado de la costa y la región hacia Medellín los hicieron por el llamado Camino Padrero en 1845, llamado así por el apoyo que prestó el cura de Ayapel, José Pío Miranda. Después, estos traslados partían desde distintos puntos, teniendo como base la hacienda Marta Magdalena en el sur de Montería, con destino a Medellín especialmente y otros lugares del interior, Cartagena y Barranquilla.

## Importancia

La importancia de la región radica fundamentalmente en su posición geoestratégica al contar con costas en los océanos Atlántico y Pacífico, los golfos Urabá, Morrosquillo, Cupica y Tribugá, su proximidad al canal de Panamá, su talento humano producto de constantes flujos migratorios de gentes diferentes por sus características socio culturales como indígenas embera, cunas, tules, káticos y zenúes, afro descendientes del pacífico y atlántico, sinuanos, sabaneros, caribeños y paisas, además de la riqueza agroecológica de sus suelos y subsuelos ricos en minerales y variada y abundante fauna y flora.

La región cuenta con ecosistemas estratégicos como los parques naturales nacionales Paramillo con un área de 492.000 hectáreas y Katíos con 72.000 hectáreas; el Darién, la frontera biodiversa con la República de Panamá; sistemas de humedales del bajo Atrato, Sinú, San Jorge y Cauca y recursos hídricos como la Mojana, las ciénagas de Tumaradó, Grande del Bajo Sinú, Ayapel; los ríos Cauca, Nechí, Sinú, San Jorge, Atrato, León, Tumaradó, San Juan, Baudó; manglares, recursos minerales, forestales, agricultura, ganadería, turismo de salud, cultural, playa, ecoturismo y etnoturismo.

## POBLACIÓN Y ÁREA DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA BIODIVERSA

DEPARTAMENTOS Y ZONAS	NÚMERO DE MUNICIPIOS	ÁREA Km <sup>2</sup>	POBLACIÓN		
			CABECERA	RESTO	TOTAL
CÓRDOBA	30	25.020	855.404	777.233	1.632.637
SUCRE	26	10.670	546.390	280.390	826.780
CHOCÓ	30	46.530	238.067	247.476	485.543
SUR DE BOLÍVAR	17	16.136	99.213	166.732	265.945*
URABÁ ANTIOQUEÑO	11	11.664	293.235	215.567	508.802 *
BAJO CAUCA	6	8.585	164.768	110.685	275.453 **
TOTAL	120	118.605	2.197.077	1.798.083	3.995.160
	10,6%	10,3%			8,5%
TOTAL NACIONAL	1.123	1.141.748			46.581.823

*Población de los departamentos proyectada a 2012 / \*Año 2005 / \*\*Año 2011 - Fuente: Dane*

### MUNICIPIOS DE LAS ZONAS QUE HACEN PARTE DE LA REGIÓN

ZONAS	MUNICIPIOS QUE LA CONFORMAN
SUR DE BOLÍVAR	Achí, Altos del Rosario, Arenal del Sur, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Montecristo, Morales, Regidor, Río Viejo, Norosí, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio.
URABÁ ANTIOQUEÑO	Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte.
BAJO CAUCA	Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza.

*Fuentes: Instituciones oficiales.*

El desarrollo económico de la región tuvo su principal soporte en los continuos flujos migratorios de pobladores de las diferentes subregiones atraídos por la riqueza aurífera de las cuencas de los ríos San Jorge, la parte baja del Cauca y Nechí que estimuló la presencia de comerciantes y mineros de Mompós, Majagual y Ayapel; la tagua, caucho, ipecacuana o raicilla y maderas del norte de Urabá y Chocó motivó la presencia de los sinuanos; y el San Jorge y bajo Cauca la de los sabaneros. Colonos del sur del departamento de Bolívar (hoy departamentos de Córdoba y Sucre) también se desplazaron a Cáceres y Nechí ante la fiebre del oro. Los valles aluviales atrajeron a los cultivadores de arroz y a los siriolibaneses o “turcos” para su comercialización.

El transporte de ganado a pie al centro consumidor de Medellín, con la consiguiente merma en los semovientes por el viaje en las trochas llevó a organizar las grandes haciendas ganaderas en Montelíbano, Ayapel, Planeta Rica, Cauca, el Sinú y Urabá; lo cual se convertiría posteriormente en presión de los finqueros de las sabanas de Bolívar y Antioquia sobre campesinos e indígenas como los Zenúes y los Embera quienes, expulsados por la violencia, buscaron las partes altas de los ríos para sobrevivir. La construcción de las carreteras Medellín–Turbo y Medellín–Montería (troncal de occidente), estimuló la presencia de grandes empresas mineras.

En 1960 establecieron cultivos de banano en áreas significativas dando inicio a la agroindustria del banano. En 1985 ya estaban las concesiones madereras en el Darién, aparecieron empresas grandes como Mineros de Antioquia, Frontino Gold Mines, Cerro Matoso, Carbones del Caribe y Argos, entre otras, y en las últimas décadas los palmicultores invadiendo territorios colectivos.

Mientras tanto, prosiguió la economía de subsistencia mediante actividades extractivas y cultivos sin o con poca técnica como arroz, yuca y pesca, al lado de una ganadería extensiva de terratenientes que acumularon tierras y las cultivaron con pastos en detrimento de la agricultura de productos alimenticios humanos.

En 1980 introdujeron los primeros cultivos de coca, remplazando el auge marimbero de Urabá y Guajira. Comenzaron por los municipios de Tierralta, Valencia, San Pedro de Urabá, Turbo, Tarazá, Ituango, aprovechando la situación geográfica que permite establecer corredores estratégicos para todo tipo de actividades ilegales que iniciaron con el contrabando de electrodomésticos, menajes, cigarrillos, licores y telas.

## PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN

DEPARTAMENTOS Y ZONAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CÓRDOBA	Minería (ferroníquel, carbón, oro), comercio, servicios, energía eléctrica, ganadería, agricultura, madera, forestal (teca, acacia, melina, eucalipto), agroindustrial (algodón, maíz, yuca, palma aceitera y en proceso: cacao y caucho), construcción, transporte, cultivos de uso ilícitos.
CHOCÓ	Biodiversidad, agricultura, ganadería, madera, pesca, minería (oro, platino), turismo, artesanías, cultivos de uso ilícitos.
SUCRE	Agricultura, ganadería, comercio, turismo, servicio, minería (cemento, cal, gas), agroindustria (yuca), puerto marítimo, cultivos de uso ilícitos.
SUR DE BOLÍVAR	Minería (oro), ganadería, agricultura, cultivos de uso ilícitos.
URABÁ ANTIOQUEÑO	Agricultura de exportación (banano, plátano), puerto, ganadería, agricultura, turismo, comercio, pesca, cultivos de uso ilícitos.
BAJO CAUCA	Minería (oro), comercio, ganadería, agricultura, piscicultura, construcción, cultivos de caucho, arroz, cultivos de uso ilícitos.

Fuentes: Instituciones oficiales, personas informadas.

## Lo que está sucediendo

En los análisis sobre la región en la Costa han faltado más vivencias personales, seguimiento y evaluación de experiencias significativas, consultas y aprendizajes con los que tienen el conocimiento práctico y comprobado, conocer más las comunidades, recursos, ambientes y paisajes, más disposición a tener en cuenta la diversidad territorial y heterogeneidad étnica y cultural, la composición multicultural campesina y rural, la historia, características,

capacidades e identidades de las comunidades, los poderes locales, el control físico y estratégico del territorio, los liderazgos, la pertinencia y, en fin, todo lo que complementa lo financiero, administrativo, técnico y competitivo que, por lo general es lo que han tenido en cuenta para conformar la región. El país y la región cuentan con dinero, funcionarios preparados, tiempo, logística, tecnología, programas y todo lo necesario para culminar trabajos exitosos y sostenibles pero en la mayoría de los casos los resultados no son los esperados. ¿Por qué?

## **A. LAS LENTAS DECISIONES GUBERNAMENTALES**

En 1990 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, propuso la creación de la región denominada Gran Urabá (Urabá antioqueño, chocono y cordobés), alto Sinú y San Jorge, la región del futuro. Aconsejó, además, impulsar un programa masivo de reforma agraria que permitiera el asentamiento de numerosas familias campesinas y reincorporados de grupos guerrilleros que estaban próximos a dejar las armas, entre ellos el Ejército Popular de Liberación, EPL y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. No hubo ningún pronunciamiento.

En 1991 el segundo Foro del Alto Sinú, reunido en la población de Valencia, reiteró el apoyo a la propuesta del Incora y solicitó al gobierno nacional la adopción de un Plan especial de apoyo al proceso que se vivía en la región con ocasión de la desmovilización del EPL. Las esperanzas no eran muchas, los asistentes recordaban que a los cordobeses les habían negado en 1988 la declaratoria de emergencia económica con motivo de las graves inundaciones que sufrieron y en 1990 la solicitud de una Consejería social debido al recrudecimiento de la violencia en todas sus manifestaciones. Al final tampoco hubo pronunciamiento oficial.

Veintidós años después de la propuesta del Incora y gracias a la iniciativa del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, su gobierno habla de costear el Urabá y tomó la iniciativa, con invitación a los gobiernos de Córdoba y Chocó, de poner en práctica por primera vez en el país la ejecución del Contrato Plan Gran Darién con el objetivo de sacar de la pobreza extrema a 23 municipios de los tres departamentos en cuatro territorios estratégicos: alto Atrato, Urabá, bajo Cauca y Nudo Paramillo. De acuerdo con el gobierno nacional los Contratos Plan son una herramienta de coordinación interinstitucional entre diferentes niveles de gobierno para realizar y cofinanciar proyectos estratégi-

cos de desarrollo territorial con proyección a mediano y largo plazo, mediante contrato entre el gobierno nacional y las entidades territoriales de manera independiente y eventualmente con participación de otros actores, públicos o privados del desarrollo local. Dentro de los proyectos a ejecutar están las cadenas productivas de cacao, plátano y acuicultura; vivienda nueva, reubicación y servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; salud, inclusión social, educación e infraestructura.

## **B. LA REACCIÓN EN LA COSTA**

En algunos sectores de la Costa el tema de la regionalización sigue despertando interés porque aún no han logrado el objetivo de constituirla como entidad territorial. Ahora, con las nuevas normas sobre regalías y los llamados Contratos Plan, más las propuestas e iniciativas tomadas por el gobernador de Antioquia, se observa una apertura en el análisis. Por ejemplo, ya saben y reconocen que Antioquia y Chocó tienen costas en el Caribe y por lo tanto son costeños, aunque no faltan los que siguen discriminándolos, haciendo la diferencia entre costeños del Caribe y costeños Urabaenses.

## **C. LA FUERZA PÚBLICA Y ALGUNAS INSTITUCIONES CON VISIÓN**

### **MÁS AMPLIA**

En septiembre del 2009 la Policía creó el Comando operativo especial de seguridad ciudadana del bajo Cauca antioqueño con unidades de Córdoba y Antioquia. Del primero, hicieron parte las Estaciones de Policía de Montelíbano, Puerto Libertador, Ayapel, Uré, La Apartada y la subestación Tierradentro. Del segundo, las Estaciones de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza y la subestación La Caucana. La creación obedeció “a la importancia estratégica que tiene la zona para la economía del país, la confluencia de conflictos de tipo social, político y de orden público, así como el incremento de los índices delincuenciales”. Por razones administrativas y de recursos dejó de funcionar poco tiempo después.

En esta zona hay presencia de dos operaciones de la fuerza pública: Troya con intervención de la Policía, Ejército y Armada y Medusa con la Fuerza de Tarea Conjunta “Nudo de Paramillo” del Ejército en la zona comprendida entre Montelíbano-Puerto Libertador y Tarazá-Ituango.

El año pasado entró a operar la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación y Reconstrucción Territorial en remplazo del Plan Nacional de Consolidación. Una de las oficinas, la Gerencia regional Nudo de Paramillo, funciona en Montería y es la que atiende los 15 municipios incluidos en el Plan: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré en Córdoba e Ituango, Valdivia, Briceño, Anorí, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Tarazá, Cáceres y Caucasia en Antioquia. Estas zonas de consolidación las caracterizan por tener “débil presencia institucional, alta vulneración de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, presencia de cultivos ilícitos, centros de acción del terrorismo, narcotráfico y sus interconexiones y dependencias de la población frente a economías ilícitas”.

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incodec, acordaron “diseñar y gestionar programas de desarrollo rural integral con enfoque territorial desde la perspectiva de planificación y focalización de las áreas de desarrollo rural, con el objetivo de promover la recuperación socio productiva de predios de familias vulnerables, víctimas del conflicto, pequeños productores rurales y/o beneficiarios de reforma agraria e impulsar una política de desarrollo humano sostenible en los territorios en que ambas instituciones intervienen.

Teniendo en cuenta el esquema general y los elementos de valor propios de la política de tierras y con el fin de impulsar el desarrollo productivo el PNUD a través de su programa Redes y el Incodec suscribieron un convenio que busca el diseño de un modelo de gestión de desarrollo rural en la zona del Bajo Cauca, la cual incluye 6 municipios del Sur de Córdoba (Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, La Apartada, Buenavista y Ayapel) y los 6 municipios de la subregión del Bajo Cauca en el Departamento de Antioquia (Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza). Este modelo de gestión debe integrar propuestas concertadas entre actores sociales intersectoriales en torno al ordenamiento productivo y el desarrollo rural con enfoque territorial y de sensibilidad al conflicto para los municipios priorizados”.

Además de estos programas y la presencia permanente de la fuerza pública en la región y particularmente en la zona del sur de Córdoba, Urabá y bajo Cauca antioqueños, también intervienen el Departamento para la Prosperidad Social con sus diferentes programas, iglesias de distintas denominaciones, agencias y organismos de cooperación nacional e internacional y organizaciones no gubernamentales y aun así el conflicto y la pobreza continúan.



## **D. LAS FARC Y LAS ACCU HAN ENTENDIDO Y APLICADO LO REGIONAL**

Los Castaño y Mancuso diseñaron su plan regional paramilitar con alcance nacional teniendo en cuenta no solo los recursos, localización geográfica, apoyo previo, entre muchas otras ventajas que posee y les brindó la región. Ellos conocían muy bien la situación de pobreza de la mayoría de la población, su abandono por parte del gobierno, el grado de subordinación a que habían llegado, producto de la prolongada esclavitud, semiesclavitud, peonazgo por deudas, terrajes, jornales ocasionales y precarios, la impotencia llegada al límite y las estrategias de supervivencia que han empleado para sobrevivir en medio del conflicto por períodos tan largos. Ampliaron y utilizaron el conocimiento que tenían sobre los criterios, costumbres, creencias, normas y principios de las familias, los adolescentes y jóvenes de las distintas comunidades que recorrían. Así, le llegaron a la gente, la convencieron y la hicieron aliada y defensora. Muchos aún no entendemos ¿por qué el gobierno con más capacidad y conocimiento no ha aprovechado mejor la realidad regional desde hace mucho tiempo?

Un esquema aproximado de cómo actuaban cuando llegaban a un lugar nuevo con el propósito de afincarse era el siguiente: 1. Identificar la conveniencia del lugar y los enemigos para eliminarlos o neutralizarlos. Apropiarse de sus recursos o bienes. Establecer relaciones. Buscar aliados. Conformar grupos de apoyo. 2. Adquirir tierras. Adelantar actividades de narcotráfico. Control de comunidades. Montar o ampliar bases. 3. Buscar acuerdos o cooptar a políticos, funcionarios, fuerza pública, educadores, medios de comunicación, justicia, academia, iglesias, empresarios, comerciantes. 4. Intervenir directa o a través de terceras personas en las administraciones públicas, cargos de elección popular o manejo de empresas y negocios.

**PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN LA REGIÓN, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA DESMOBILIZACIÓN DE LAS ACCU (2003-2006)**

DEPARTAMENTOS Y ZONAS	ANTES	DURANTE	DESPUÉS
CÓRDOBA	EPL, Farc, ELN, PRT, ACCU	Casa Castaño (Fidel, Carlos y Vicente Castaño), Bloque Córdoba (Salvatore Mancuso), Bloque Elmer Cárdenas (Freddy Rendón alias el 'Alemán'), Bloque Héroes de Tolová (Diego Murillo alias 'Don Berna'), Bloque Héroes de los Montes de María (Edwar Covos, alias 'Diego Vecino' y Rodrigo Mercado alias 'Cadena'), Mineros (Ramiro Vanoy Murillo alias 'Cuco Vanoy'), Farc.	Paisas, Rastrojos, Águilas, Farc.
CHOCÓ	EPL, Farc, ELN, ACCU	Bloque Elmer Cárdenas, Bloque Bananero (Ever Veloza alias 'HH'), Pacífico (Javier Zuluaga, alias 'Gordolindo' y Luis Eduardo Durango Echevarría, alias 'Sebastián Guevara'), Farc.	Rastrojos, Urabeños, Farc.
SUCRE	EPL, PRT, CRS, ACCU	Héroes de los Montes de María (Rodrigo Mercado alias 'Cadena' y Edward Covos alias 'Diego Vecino'), Bloque La Mojana (Eder Pedraza Peña alias 'Ramón Mojana').	Águilas, Rastrojos, Urabeños, Farc.
SUR DE BOLÍVAR	EPL, ELN, Farc, ACCU	Bloque Central Bolívar (Rodrigo Pérez Alzate alias 'Julián Bolívar'), Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Ramón Isaza alias el 'Viejo'), Farc.	Paisas, Rastrojos, Farc.
URABÁ ANTIOQUEÑO	EPL, Farc, ACCU	Casa Castaño, Bloque Elmer Cárdenas, Bloque Bananero, Farc.	Urabeños, Farc.
BAJO CAUCA	ELN, Farc, ACCU	Bloque Mineros, Bloque Central Bolívar, Farc	Paisas, Águilas, Rastrojos, Farc.

Fuentes: Fiscalía, Policía Nacional, Agencia Colombiana para la Reintegración, medios de comunicación, centros de investigación

## NACIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LAS AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CÓRDOBA Y URABÁ

- Casa Castaño – Mancuso
- SUCRE: Diego Vecino – Ramón Mojana
- Rodrigo Cadena – Willy Cobo
- URABÁ ANTIOQUEÑO: Casa Castaño – Pedro Ponte - El Alemán – Hermógenes Maza
- CÓRDOBA: Mancuso – Don Berna
- BAJO CAUCA: Cuco Vanoy
- URABÁ CHOCOANO: Mario
- CESAR: Jorge Cuarenta
- MAGDALENA: Hernán Giraldo
- SANTANDER: Mancuso
- NARIÑO, VALLE: Hernán Hernández
- SURORIENTE ANTIOQUEÑO: René Posada
- OCCIDENTE ANTIOQUEÑO: Alfredo Memín
- LLANOS: Francisco García
- SUR DE BOLÍVAR: Ramón Isaza

## La permanencia de la violencia

### **VIOLENCIA BIPARTIDISTA**

La ganadería extensiva a medida que reemplazó a la agricultura tradicional provocó aumentos inusitados en la mano de obra desocupada y semiocupada que, para sobrevivir, debió hacer uso del arrendamiento de tierras, la aparceería, la medianería, el terraje, el jornal, el trabajo a destajo y la colonización. En busca de esta última, marcharon en tandas al Darién, Golfo de Urabá, riberas de los ríos Atrato, alto Sinú y San Jorge y la zona minera del bajo Cauca, guiados por la esperanza del oro y la tierra.

El gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura comenzó la titulación de baldíos con la simple declaración de posesión, estimulando cuadrillas de campesinos sin tierra y minifundistas procedentes de las zonas mencionadas arriba. Entre los años 1946 y 1947 se registraron en este territorio los primeros desplazamientos de campesinos de la zona rural a las cabeceras municipales, producto de la llamada violencia “bipartidista” que permitió, entre otras cosas, apoderarse de las tierras que habían sido ocupadas entre los años 1920 y 1930 por jornaleros sin tierra provenientes de las sabanas del departamento de Bolívar, quienes terminaron desplazados en Urabá, Alto Sinú y San Jorge, norte del Chocó y Bajo Cauca.

Los campesinos, víctimas de la injusticia asumieron su propia autodefensa en San Juan de Urabá, Santa Catalina, Alto Sinú, Alto San Jorge e Ituango. Fue el principio del conflicto armado en la región.

### **VIOLENCIA GUERRILLERA**

Entre 1953 y 1957, durante el gobierno de Rojas Pinilla, hubo cierta tranquilidad por la desmovilización que había logrado de gran parte de los grupos liberales alzados en armas, entre ellos el de Tierralta pero no el del San Jorge. La calma aparente que siguió después fue rota en el año 1964 cuando apareció la guerrilla de las Farc, proclamándose defensores de los campesinos ante el acoso de los terratenientes que buscaban nuevamente tierras para expandir su ganadería y los cultivos de banano. En 1967 apareció el Ejército Popular de Liberación EPL y casi simultáneamente el Ejército de Liberación Nacional ELN.

Han actuado en la región los frentes 5, 18, 34, 36, 47, 53, 54 y 57 de la FARC, varias columnas del EPL, del ELN en el bajo Cauca, sur de Bolívar y Chocó, así como el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y la disidencia del ELN, la Corriente de Renovación Socialista con paso fugaz por Sucre y Córdoba, fundamentalmente en los Montes de María.

## **VIOLENCIA PARAMILITAR**

La presencia y acción de la guerrilla llevó a los terratenientes a rearmar grupos de terroristas, trayendo los primeros del Magdalena Medio. En 1987 el gobierno nacional mostró cierta tolerancia con los grupos de autodefensa creados para “resistir a la subversión”, cuando aceptó como principio natural que “cada cual tiene derecho a reclamarlo y si las comunidades se están organizando, hay que entender que quieren proteger sus bienes y sus vidas”. Esta apreciación fue entendida por los violentos como una especie de respaldo a sus acciones y en consecuencia aumentó el número de muertos, menores reclutados, violaciones, boleo a comerciantes y finqueros, incluso, a cocaleiros, mineros y aserradores que no pertenecían a la “organización” o fuesen propietarios de fincas que no estuviesen bajo el control de la “compañía”. Es más, hubo finqueros a quienes le imponían los administradores de las fincas como ocurrió en Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia; crecieron los desplazamientos con el consiguiente desarraigo, desadaptación y deserción escolar, secuelas psicológicas y emocional de muchos pobladores entre 1985 y la fecha. Son representativos los desplazamientos y despojos de tierras del Medio Baudó, Medio San Juan, Istmina, Sipí, cuenca del Atrato, Darién, Bojayá, Jiguamiandó, Curvaradó, El Salado, Blanquicet, La Chinita (barrio de Apartadó) y las masacres de El Tomate, Mejor Esquina, Tierradentro, Juan José, San José de Apartadó.

Una vez obtenido el control territorial por los paramilitares en connivencia con militantes del EPL que habían sido cooptados, aumentó la presión sobre los campesinos con el fin de despojarlos de las tierras, al igual que a los líderes sindicales y étnicos, defensores de derechos humanos, de organizaciones campesinas o representantes de las diferentes iglesias en todos los niveles jerárquicos. La orden de los comandantes paramilitares era la de sumarse a su causa o ser declarados objetivo militar.

En 1991 hubo dos desmovilizaciones: en Juan José, Córdoba y Pueblo Nuevo, Antioquia, con gran parte de los integrantes del EPL, una de sus fracciones

terminó integrada a los grupos paramilitares y en Don Gabriel, Ovejas, Sucre el turno fue para el PRT. Tres años después en Flor del Monte, Sucre, le correspondió a la Corriente de Renovación Socialista.

La crisis del sector agropecuario entre los años 1998 y 2000, disminuyó la inversión en el sector rural y obviamente los ganaderos, con dificultades para movilizarse con seguridad a sus tierras debían sostener con kilos de carne y litros de leche el accionar de los paramilitares, quienes también recibían financiación de los empresarios que aportaban un porcentaje sobre la venta de sus productos como banano, flores, caña de azúcar, palma aceitera, fraguando además una alianza estratégica con quienes habrán pasado de la exportación de marihuana a la exportación de cocaína. El dinero proveniente de la exportación lo invertían en más precursores químicos, “compras de tierras”, ganadería, cultivos de coca y más muertos. Participaron directamente en la financiación de los paramilitares, empresas y gremios como Unibán, Banafрут y Augura, según autoridades y medios de comunicación.

¿Dónde estaba la dirigencia política del país, especialmente la de la Región Interoceánica biodiversa?. Un alto número de ellos asociados con las FARC, el EPL, los Paramilitares y las Bacrim. La gran mayoría de los políticos participaron y todavía lo hacen algunos, esgrimiendo la consigna peregrina que es mejor “compartir el poder que no tenerlo” y así, a través de asociaciones de municipios propiciaron el saqueo de los recursos presupuestales municipales, departamentales y hasta de los territorios indígenas, se apoderaron de los recursos de la salud, de las corporaciones autónomas regionales, de los contratos de infraestructura, ejerciendo un verdadero control territorial con el visto bueno de las autoridades.

Reuniones de políticos con paramilitares se dieron en fincas ubicadas en cercanías a los municipios de Tarazá, Caucasia, Cáceres (Piamonte), Tierralta (El Diamante, Santafé Ralito, Nueva Granada, Volador), Valencia (Villanueva, Guadual), San Pedro de Urabá ( Santa Catalina, El Tomate, Guadual), Arboletes (El Mellito, El Carmelo, Candelaria, Las Platas), Necoclí (Tulapa, Pueblo Nuevo, Mulatos), Canalete, Los Córdoba, Puerto Escondido, San Onofre.

Asignaban candidatos a la presidencia, gobernaciones, congreso, alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales, dirección de las corporaciones autónomas regionales, interferían con amenazas la elección de personas municipales, alcaldes y gobernadores, entregaban cuotas burocráticas a

los paramilitares y cerraban el ciclo mediante contratación a través de organismos no gubernamentales y asociaciones de municipios.

### REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE \*

DEPARTAMENTOS Y ZONAS	NRO. DE SOLICITUDES	ÁREA (HAS)
CÓRDOBA	1.177	56.382
SUCRE	1.177	46.502
CHOCÓ	445	25.579
BAJO CAUCA	199	19.050
SUR DE BOLÍVAR	405	47.706
URABÁ ANTIOQUEÑO	2.057	105.739
TOTAL	5.460	300.958
TOTAL NACIONAL	27.183	2.026.847

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras - \* Fecha corte: Noviembre de 2012.

### SOLICITUDES DE INGRESO AL REGISTRO DENTRO Y FUERA DE LA REGIÓN \*

DEPARTAMENTOS Y ZONAS	Nro. de solicitudes de ingreso al registro dentro de la Región	Nro. de solicitudes de ingreso al registro fuera de la Región
CÓRDOBA	274	903
SUCRE	897	280
CHOCÓ	118	327
BAJO CAUCA	59	140
SUR DE BOLÍVAR	13	392
URABÁ ANTIOQUEÑO	924	1133
TOTAL	2.285	3.175

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras - \* Fecha corte: Noviembre de 2012.

## ■ ¿Cuál es la propuesta?

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en su informe *Colombia rural Razones para la esperanza*, presenta la propuesta de reforma rural transformadora con dos grandes objetivos: combatir la pobreza y resolver el conflicto rural para alcanzar una sociedad rural estable, sostenible e involucrada en un proceso de modernización.

“La reforma contiene cuatro componentes o procesos articulados: (a) la seguridad humana, (b) el desarrollo institucional, (c) el desarrollo rural y (d) una política integral de tierras. Estos cuatro elementos conforman una red de decisiones para la transformación rural.

La reforma rural transformadora propone incidir fuertemente en el componente productivo y de mercados. Esto significa actuar sobre por lo menos ocho grandes aspectos, con el liderazgo del Ministerio de Agricultura:

- a. La modernización de la producción.
- b. El avance tecnológico.
- c. La construcción de la infraestructura.
- d. Los acuerdos comerciales.
- e. La seguridad alimentaria.
- f. El crecimiento de las exportaciones y del mercado interno.
- g. El uso de potenciales agropecuarios, forestales y pesqueros.
- h. El avance de la competitividad.

Mención aparte amerita la transformación de las agriculturas de subsistencia. Este es un proceso de más largo plazo que requiere una fase de transición lenta hacia la conformación de empresas familiares rurales con capacidad de avanzar en sus procesos de gestión, acumulación, conformación de empresas de servicios, desarrollo de sistemas de cooperación y articulación con empresas agropecuarias mayores a través de negocios horizontales y verticales y con organizaciones de segundo y tercer nivel en la prestación de servicios”

Difícil encontrar personas u organizaciones que estén en desacuerdo con esta propuesta general. Sus criterios, objetivos, alcances y metodología son aceptados por muchos. Ahora corresponde aplicar el proyecto del PNUD-Incoder en la zona del sur de Córdoba y el bajo Cauca antioqueño para ver hasta qué punto es posible conseguir los cambios que estamos requiriendo y de esta



manera replicarlo en otros lugares de la región. La participación y coordinación permanente de la institucionalidad en sus diferentes niveles, de los grupos y organizaciones de las comunidades, de acompañantes nacionales e internacionales y los equipos del proyecto son fundamentales. Por esta razón recomendamos:

- a. Redefinir la región de manera integral, con sus antecedentes y procesos vividos que nos asegure una mayor aceptación..
- b. Seleccionar las comunidades y territorios de estudio y aplicación-enseñanza.
- c. Sistematizar y evaluar los conocimientos y experiencias locales, regionales y nacionales. Ahí están por ejemplo los territorios colectivos de los negros en el Chocó, las Comunidades de Paz del Urabá antioqueño, los Programas de Desarrollo y Paz del sur de Bolívar y los Montes de María de Sucre y Bolívar, los campesinos y pescadores del bajo Sinú y los mineros del bajo Cauca, entre otros.
- d. Conocer la propuesta del PNUD-Incoder, la capacidad y disposición real de la institucionalidad y las lecciones aprendidas de los grupos, organizaciones y comunidades. Buscar puntos comunes que sean puntos de partida para trabajar juntos propuestas más convenientes para todos.
- e. Celebrar reuniones periódicas con todos los actores del proyecto para asegurar su avance y desarrollo eficaz. ¿Será posible?

#### AGRADECIMIENTOS

A los investigadores Diego Vellojín de la Rosa y José Galeano Sánchez por sus invaluable aportes.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Fals Borda, Orlando (1976). *Capitalismo, hacienda y poblamiento en la Costa Atlántica*. Bogotá.
- García de la Torre, Clara Inés & Aramburo Siergert, Clara Inés (2011). *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008*. Cinep – Odecofi, Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia.

- Gobernación de Córdoba (1991). El gran Urabá, Alto Sinú y San Jorge: la región del futuro. *Revista Actualidad Agropecuaria*. Montería.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2012). *Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural*. Bogotá.
- Moreno de Ángel, Pilar (1993). *Antonio de la Torre y Miranda, viajero y poblador*. Bogotá; Planeta.
- Negrete Barrera, Víctor (2007). *Lucha por la tierra y reforma agraria en Córdoba*. Universidad del Sinú, Centro de Estudios Sociales y Políticos. Montería.
- Ocampo, Gloria Isabel (2007). *La instauración de la ganadería en el Valle del Sinú: la hacienda Marta Magdalena 1881- 1956*. Universidad de Antioquia.
- Palacios de la Vega, Joseph (1994). *Diario de viaje*. Gobernación del Atlántico.
- PNUD (2011). *Informe nacional de desarrollo humano 2011. Colombia rural. Razones para la esperanza*. Bogotá.

## Lo que sucede con CERRO MATOSO no es nuevo

### El principio

En 1940 fueron descubiertos los ricos yacimientos de níquel, hierro y otros minerales en Cerro Matoso a 22 kilómetros de Montelíbano en el departamento de Córdoba. En 1956 presentaron dos propuestas que durante mucho tiempo disputaron el derecho a la exploración y explotación: la de Santiago Gregory y la Richmond Petroleum Company of Colombia que en 1965 cambió su razón social por Chevron Petroleum Company of Colombia.

1. La Richmond a pesar de tener demandadas las resoluciones que la escogieron como contratante comenzó a efectuar sondeos en la zona desde 1958, a tal punto que para el mes de mayo de 1964 cuando el Consejo de Estado declaró nulas esas resoluciones y ordenó escoger al primer proponente que era Gregory o sus cesionarios extranjeros, ya había firmado un año antes el contrato de concesión con el gobierno nacional. De acuerdo a este contrato al concesionario extranjero le hicieron entrega total del área, no le fijaron condición

ni lugar para pagar regalías ni tampoco para una explotación de carácter industrial transformando los minerales en el país, no aclararon la participación colombiana en el negocio, ni el pago de primas, ni el compromiso de construir obras de desarrollo, ni la reducción del periodo de explotación, ni la reversión gratuita de la planta de tratamiento, ni la limitación de las remesas de utilidades al exterior, ni la intervención del Ministerio en la escogencia del proceso y de la planta de transformación, ni el control del mismo sobre los costos y las inversiones. Ese mismo año descubrieron que la Richmond había suscrito con el gobierno ocho contratos de explotación de hierro, níquel, cromo, cobalto y había formulado, además, 16 propuestas sobre los mismos minerales. Los derechos otorgados cubrían la totalidad de las 8.266 hectáreas de terrenos níquelíferos descubiertos hasta entonces.

Con semejantes privilegios la Richmond demandó la resolución del Consejo de Estado, presionó los distintos organismos oficiales que tenían que ver con la determinación tomada, negoció con otra compañía norteamericana la Hanna Mining Company su participación en la concesión y al final, como era de esperarse, inclinaron la balanza a su favor. Resuelto el litigio la Chevron-Hanna fundó la Compañía de Níquel Colombiano S.A (Conicol), quien participó en el proyecto con el 66.6% del capital y quedó con el control administrativo y operativo del proyecto, así como la explotación del yacimiento, mientras el gobierno creó la Empresa Colombiana de Níquel (Econiquel) con una participación del 33.4%, a pesar de ser el yacimiento propiedad de la nación, además, debió aportar no solo el capital para poner en marcha el proyecto sino que se encargó de gestionar la financiación necesaria para realizarlo.

2. Ya firmado el contrato, elegida la junta directiva de Econíquel y conocidas las primeras determinaciones de la empresa, vinieron las reacciones de parte de hacendados, dirigentes políticos y grupos económicos, quienes contaban con mayor información sobre lo que estaba sucediendo. La población en general, mientras tanto, fue marginada, los datos que recibían eran fragmentarios, deformados en ocasiones, sin embargo, su participación fue decisiva en los momentos claves. Lo primero que hicieron fue enviar en diciembre de 1970, al entonces presidente Misael Pastrana Borrero el siguiente telegrama: “ciudadanía Montelíbano sin distinciones políticas, religión o raza, nativa o adoptiva, respetuosamente exprésale total inconformidad por cuanto en la junta directiva Empresa Minas de Matoso no incluyese como principal un elemento cordobés... Así mismo extrañamos no se haya escogido ciudad Montería como sede Junta Directiva, tal distinción corresponde por derecho propio como capital departamento en cuya jurisdicción y seno está ubicado precioso metal níquel. Como amigos de su gobierno fomentaremos movimiento cívico departamental fin reclamar derechos corresponde este municipio y evitar que nuestro departamento subdesarrollado se le prive disfrutar distinción y beneficios puede generar explotación Cerro Matoso en caso no modificarse algunas cláusulas contratos y no cambie situación respecto desconocimiento nuestros valores humanos e importancia nuestra capital”.

3. La población de Montelíbano respondió a este llamado: participó activamente en reuniones y desfiles y generó tal expectativa que organizaron una manifestación de grandes repercusiones el 10 de enero de 1971. Al día siguiente los organizadores enviaron la siguiente comunicación: “Ayer realizo gran manifestación cívica, no menos veinte mil personas fin exigir dos representantes principales y suplentes en Junta Directiva Econíquel para tranquilidad ciudadanía región y reconocimiento derechos cordobeses. Seguiremos organizando manifestaciones esta naturaleza todo Córdoba hasta conseguir objetivos”. El 4 de febrero recibieron la noticia de la elección de dos miembros principales y tres suplentes en la Junta de Econíquel. Alentados por el triunfo decidieron “seguir luchando hasta lograr capacitar personal cordobés evitar importarlo otras regiones, distribución regalías beneficie departamento y municipio, iniciación obras fundamentales desarrollo y municipio reciba acciones de Econíquel”. Consiguieron, además, que las oficinas principales se establecieran en Montelíbano y no en Caucasia, Antioquia, donde funcionaron durante cierto tiempo.

4. La Junta Cívica que habían conformado, apoyada por el pueblo, exigió a Conicol el cumplimiento de obras de infraestructura contenidas en la cláusula décimocuarta del Contrato adicional de julio 22 de 1970: construir y mantener las carreteras que se requieran para realizar los trabajos de exploración, explotación, procesamiento y transporte de sus productos; acondicionar la pista del aeropuerto; recursos para la construcción y mantenimiento del acueducto, planta de purificación y alcantarillado de la población; construir y mantener en funcionamiento un hospital con capacidad y dotación suficientes para atender a los trabajadores del concesionario y sus familias, lo mismo que escuelas primarias, viviendas y obras de saneamiento ambiental.

5. A finales de 1972 desapareció la Junta Cívica. Algunos de sus dirigentes estuvieron involucrados en malos manejos económicos y en satisfacer intereses particulares como llegar a ser alcaldes o concejales, escalar posiciones en la burocracia, ocupar puestos de importancia o tener influencias en las empresas encargadas del proyecto. En diciembre de 1979 el presidente de la república inauguró oficialmente los trabajos de la Empresa Cerro Matoso S.A constituida por Conicol y Econíquel y en 1982 comenzó la explotación. Para mayor información sobre este periodo pueden consultarse trabajos de Enrique San-

tos Calderón, Amilcar Acosta, Héctor Melo (La historia prohibida de Cerro Matoso, editorial Latina, Bogotá, 1973) y el libro de mi autoría Montelíbano, pasado y presente, Fundación del Caribe, Montería, 1981.

## ■ La actualidad

La empresa Cerro Matoso S.A está en manos de la anglo-australiana BHP Billiton desde el año 2005 con el 99.9% de las acciones. El contrato de concesión de 1990 le reconoció títulos sobre 686 hectáreas, 545 en Montelíbano y 141 en Puerto Libertador.

1. El próximo 30 de septiembre, después de 30 años de explotación ininterrumpida con fabulosas ganancias, terminará el contrato de concesión. El presidente de la empresa, Ricardo Escobar Pérez, informó que “la empresa diligenció ante la autoridad minera (antes Ingeominas, hoy Agencia Nacional de Minería) la solicitud de prórroga por 30 años más y ambas partes se encuentran en conversaciones alrededor de los términos y condiciones en que se haría efectiva la misma”.

La empresa, como lo hizo la Richmond en el pasado, desde bien temprano quiso asegurar su presencia en la zona. De acuerdo con el economista Guillermo Rudas, desde hace 15 años solicitó y “obtuvo licencias de exploración para diversos minerales, entre los cuales se encuentra el níquel, mediante un título que incluye un territorio con un área continua de 52.163 hectáreas en los municipios de Puerto Libertador (18.664 hectáreas), Montelíbano (17.290 has), Planeta Rica (15.064 has) en Córdoba y Tarazá (1143 has) y Cáceres (2 has) en Antioquia. El mismo economista, citando fuentes del diario El Espectador y La Silla Vacía dan a conocer “la forma poco transparente como se estaban adelantando las negociaciones con esta empresa, a pocos días de terminar el gobierno Uribe”. En palabras del profesor Francisco Azuero: intentaron valerse de “la antipática costumbre de las prolongaciones automáticas que hoy se presentan cada vez que se vence el término de una concesión minera...”

2. Una vez conocida la fecha de terminación del contrato con Cerro Matoso S.A y las negociaciones que se estaban celebrando en la más absoluta reserva entre representantes del gobierno y el equipo negociador de la empresa, las primeras reacciones fueron de los especialistas en estos temas del Foro Córdoba 60 años, un grupo compuesto por académicos, investigadores, periodistas y

líderes estudiosos de la realidad del departamento y la alcaldía del municipio de Montelíbano. El desconocimiento sobre estos temas es casi absoluto en el departamento por parte de la administración pública, los órganos de control, los medios de comunicación, la dirigencia política, los gremios económicos, las iglesias, la academia, las organizaciones no gubernamentales y por consiguiente la población en general, en especial la de Montelíbano y Puerto Libertador.

3. La administración municipal de Montelíbano está convencida de la legalidad de sus criterios y la justeza de sus peticiones. Aún cuando no las ha hecho públicas o los medios de comunicación no las han divulgado por intereses conocidos, las presentaron ante dirigentes locales, agencias y organismos de cooperación internacional. Hasta el momento cuenta con el respaldo del Departamento ambiental de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Córdoba, el Foro Córdoba 60 años y el acompañamiento a reuniones en Bogotá de los alcaldes de Puerto Libertador, Buenavista, Pueblo Nuevo y Planeta Rica. Por otra parte, un grupo de congresistas de diferentes partidos políticos conformaron el Comité por la defensa del interés público en Cerro Matoso. Le han solicitado al gobierno no precipitarse en la toma de ninguna decisión porque los colombianos tienen derecho a opinar, informe en qué van las negociaciones y entregue copia de todos los contratos suscritos entre el Estado, Cerro Matoso y las demás empresas que han tenido que ver con esta explotación. Los congresistas conservadores Nora García y David Barguil han exigido



que la negociación entre el Gobierno nacional y la empresa la hagan de cara a la comunidad e informaron que están “preparando una sesión de la Comisión Quinta del Senado en Montelíbano, en la que además estarán el Ministerio de Minas y la Contraloría para debatir abiertamente sobre esta nueva concesión”. Desde hace varios años existe una Acción Popular radicada ante el Juzgado 25 administrativo de Bogotá en contra del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas-Cerro Matoso presuntamente responsables de hechos y acciones contrarios a los intereses colectivos de los colombianos. Llama la atención el silencio de los otros grupos políticos, la gobernación, los otros alcaldes del departamento, Cámara de Comercio, Asamblea departamental, asociación de periodistas, organismos no gubernamentales y universidades, entre otros

4. Los siguientes son los criterios y peticiones de la administración municipal ante la negociación de la prórroga de concesión del gobierno nacional y la empresa Cerro Matoso:

a) Por disposición Constitucional y desarrollo legal los recursos y riquezas del subsuelo le pertenecen al Estado y en franca desigualdad legal los municipios y departamentos dueños del suelo soportan el deterioro ambiental y los impactos sociales, culturales y económicos que trae consigo la explotación minera, de ahí que merezcan un trato y reconocimiento especial.

b) Los municipios y regiones mineras cargan en su haber el estigma de la corrupción administrativa, hecho innegable, que no debe ser impedimento para reclamar un trato diferencial por ser los dueños de los recursos.

c) La administración de Montelíbano solicitó al Ministerio de Minas en nombre de los municipios del San Jorge, abrir un espacio para ejercer sus derechos a participar en el marco de las negociaciones que desde hace varios años adelanta el gobierno con la empresa BHP Billiton por la prórroga del contrato de concesión que vence en septiembre.

En respuesta a esta solicitud el viceministro de Minas “agradece al alcalde el interés de participar y considera fundamental que el municipio pueda expresar su posición frente a esta negociación” y propone organizar una reunión con la Agencia Nacional de Minería y la Dirección del Servicio Geológico Colombiano “que esperamos sea el inicio de una nueva relación y un corte de cuenta para Montelíbano y demás municipios del San Jorge en esta segunda etapa de explotación de níquel en Cerro Matoso”.

d) De estas reuniones la administración espera obtener lo siguiente: 1. Que el Gobierno adopte un trato respetuoso e incluyente hacia el departamento, municipio y zona del San Jorge y haga valer los derechos que tienen como dueños del suelo donde se encuentran los recursos naturales y minerales. 2) Que se conozcan públicamente los términos de la negociación para no repetir la historia donde los contratos de concesión no estuvieron al alcance de las autoridades municipales y los ciudadanos como documentos públicos que son e informen oportunamente sobre las modificaciones que hagan a los mismos. 3) Que analicen, acuerden y establezcan con la participación de los entes territoriales las compensaciones a que tienen derecho. 4) Que los planes de manejo ambiental sean productos de concertación entre el Ministerio del Medio Ambiente, CVS y los entes territoriales afectados. 5) Que estos acuerdos después de ser concertados sean públicos, que permitan en el tiempo exigir su cumplimiento y control social, así mismo se conozcan los planes de manejo por parte de las autoridades ambientales correspondientes y los avances en el cumplimiento de las obligaciones en ellos establecidas, especialmente en la aplicación de medidas de compensación por impactos no evitados o mitigados.

e) Dentro de las peticiones que aspiran sean tenidas en cuenta figuran las siguientes: 1) Salud. Medición permanente e independiente de los impactos sobre la salud de las poblaciones del área de influencia de la mina. El Ministerio de Salud y Ambiente verifique si las denuncias presentadas por afectaciones en piel, aumento de abortos, cáncer y enfermedades respiratorias guardan relación con la explotación minera y definan los controles y procedimientos que permitan establecer la corresponsabilidad. 2) Ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible corrobore los impactos causados y fije políticas y planes de manejo ambiental para la zona. Defina de manera transparente las medidas compensatorias e inversiones ambientales obligatorias y fortalezca la participación de la Corporación regional y los municipios en el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraídas. 3) Social y Cultural. Elaborar programas y políticas que promuevan y fortalezcan valores, principios, derechos, deberes, identidad, capacidades, creencias y costumbres que mitiguen los impactos que fluyen en entornos mineros como cultura de ilegalidad, violencia armada, social y doméstica, desconfianza, miedo, anomia, vicios, riesgos sociales para niños, adolescentes y jóvenes, entre otros. 4) Obras e Infraestructura. Acordar con las alcaldías de la zona las obras que deben desarrollarse, priorizando las de salud, saneamiento básico, agua potable, educación técnica y superior, proyectos productivos, ciencia y tecnología, procesos de transformación de materia prima y vías para el desa-

rrollo.5) Además de irregularidades en el pago de regalías e impuestos, contaminación ambiental, poco cumplimiento de su responsabilidad social, una normatividad demasiado beneficiosa para las empresas extractivas, títulos mineros y licencias ambientales notoriamente perjudiciales para las comunidades y la nación, también está en juego el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada de estos proyectos para poder participar y controlar de manera oportuna y decidida.

La poca participación de los cordobeses en esta etapa de exploración y explotación minera (ferroníquel, carbón y oro hasta el momento) y expansión eléctrica es preocupante por los efectos negativos que producirán si no existen intervenciones oficiales y de la sociedad que conozcan, vigilen, protejan y minimicen al máximo los impactos de las obras y el reconocimiento de los derechos de los cordobeses. El cese de actividades de 1.220 trabajadores rasos que laboran en la construcción de una carboeléctrica de la Generadora y comercializadora de energía del Caribe S.A, la llamada Gecelca 3, en Puerto Libertador, vecino de Montelíbano, durante más de 27 días es bastante diciente. Simplemente reclaman mejores condiciones laborales como bonificaciones, seguridad industrial, capacitaciones, descanso y salarios, además, se sienten discriminados respecto a otros trabajadores y mal tratados por los ingenieros. A propósito: hace varios meses le solicitamos a Gecelca información y aclaraciones sobre distintos temas y hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Algo más: ¿quién nos da alguna información sobre la explotación de oro en Puerto Libertador y Ayapel?

La historia nos dice que la gente de Montelíbano debió movilizarse durante meses para lograr que la empresa la instalaran en Montelíbano y no en Cauca y Conicol cumpliera lo acordado con las obras. ¿Qué estamos pensando hacer los cordobeses ante esta nueva situación?

## EL SUR de CÓRDOBA:

A la espera del Plan que acabe con el conflicto,  
la pobreza y el deterioro ambiental

### Presentación

El sur del departamento de Córdoba está formado por cinco municipios: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré. Su cobertura territorial es apreciable puesto que representa el 38.2% del total mientras su población apenas alcanza el 16.1%, de acuerdo con el mapa y cuadro siguientes:

En este territorio se encuentran comunidades indígenas (Zenú y Emberas) y negras (en San José de Uré, especialmente); la mayor parte del Parque nacional natural Paramillo (el 72% de las 492.225 hectáreas que lo componen); la hidroeléctrica de Urrá I con 340 megavatios de potencia instalada; montarán próximamente, tomando como base la subestación Cerro Matoso, el nodo eléctrico que unirá el Caribe con el interior del país y permitirá evacuar energía a Centro América; recursos naturales como ferromanganeso, carbón, oro, cobre y riqueza hídrica (ríos Sinú, San Jorge, San Pedro, Verde, Esmeralda, Manso y Uré); el 70% de la reforestación con especies introducidas (teca, acacia, melina y eucalipto); 5.000 hectáreas iniciales de caucho y cacao con algunas dificul-

## MUNICIPIOS DEL SUR DE CÓRDOBA 2012

MUNICIPIO	POBLACIÓN HABITANTES	ÁREA (KM <sup>2</sup> )
Montelíbano	76.010	1.282
Puerto Libertador	43.287	2.062
San José de Uré	10.514	518
Tierralta	92.948	4.728
Valencia	40.160	968
<b>Total</b>	<b>262.919</b>	<b>9.558</b>
Córdoba	1.632.167	25.020

Fuentes: Dane e IGAC, 2012.

tades por su tardío rendimiento y falta de apoyo, 3.000 hectáreas de papaya con problemas por las vías en mal estado y plagas, cultivos de maíz y ñame disminuidos y los de arroz y maíz sostenidos con gran esfuerzo, la ganadería tradicional con mucha tierra y poco empleo. En general la gente vive de la siembra y recolección de hojas de coca, la explotación minera artesanal y lo que pagan los que explotan legal e ilegalmente el oro con maquinaria pesada, los oficios y negocios que está generando la explotación de carbón y oro y la construcción de la carboeléctrica, el pancoger en pequeñas parcelas y los jornales esporádicos.

La violencia ha sido ininterrumpida: en 1949 comenzó la época de la Violencia bipartidista con guerrillas liberales que se opusieron al despojo de tierras y la acción del Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge que conformó Colonias campesinas, algunas de las cuales llegaron a ser corregimientos; en 1960 grupos de terratenientes y comerciantes locales y foráneos empezaron el despojo de tierra valiéndose de sicarios traídos del interior del país, engaños y trampas judiciales; en 1967 surgió la primera guerrilla de izquierda, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y así, cronológicamente, aparecieron las FARC en límites con el departamento de Antioquia en 1981, el narcotráfico en 1984, los primeros cultivos de coca en 1992, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en 1994, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en 1996, el proceso de negociación Gobierno-AUC en Santafé Ralito entre el 2003-2006 y desde entonces las acciones de grupos no desmovilizados, reincidentes y los surgidos con la desmovilización, las llamadas bandas criminales con alta capacidad de reclutamiento forzado, voluntario o con engaños, camuflaje con las comunidades e incidencia en los gobiernos locales, autoridades y organismos de justicia.

## Del Centro de coordinación de atención integral...

Debido al viejo y permanente conflicto que ha padecido la zona, en el 2004 fue incluida en el área de operación de los Centros de Coordinación de Atención Integral (CCAI). En su momento el gobierno la presentó como estrategia para “la recuperación y control militar del territorio, la lucha contra las drogas y el crimen organizado, la reactivación social y económica, el fortalecimiento del servicio de justicia formal y mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la reconstrucción del tejido social a través del uso del tiempo libre y la cultura ciudadana”. En Córdoba, los sitios escogidos para implementar estas acciones fueron la llamada Zona de Ubicación en Tierralta; Tierradentro en Montelíbano; Mielles, San Rafael, Cocuelo, Guadal y Santo Domingo en Valencia; Río Verde, Juan José y La Rica en Puerto Libertador. De esta intervención no contamos con ninguna información oficial.

“Durante el período 2004-2011, la inversión estuvo centrada en la erradicación de cultivos de uso ilícito, proyectos productivos, atención de desplazados, más cobertura en educación y atención alimentaria escolar, construcción de puentes menores, capacitación, titulación de predios, fortalecimiento militar y apoyo judicial con un costo de 117.380 millones de pesos, el 90% costeado por el gobierno nacional y el resto por el departamento y los municipios”, según declaraciones de sus funcionarios e informes del Plan. Falta conocer cuáles fueron los impactos reales que produjo esta inversión, es decir, cuál fue el mejoramiento obtenido por parte de la población.

De acuerdo con los funcionarios consultados la experiencia les permitió conocer la zona, hacer inversiones, acordar planes de acción y coordinación con instancias municipales, promocionar el programa y conformar mesas de trabajo sobre las principales necesidades. Reconocen que faltó voluntad política de la Gobernación y la existencia de politiquería y corrupción en las administraciones municipales. La infraestructura terciaria es escasa y en malas condiciones, la concentración de la tierra es alta y falta claridad sobre su tenencia y uso. Al final aseguraron que a pesar de las dificultades algunos territorios estaban en proceso de recuperación y transición. No faltan los analistas que llaman la atención sobre la falta de interés, compromiso y capacidad de gestión de las alcaldías, la carencia de información y visión integral de las oficinas de planeación y el marcado desinterés de los Concejos y Personerías por estos temas.

La mayoría de los líderes y representantes de organizaciones sociales tienen claro que lo hecho por el gobierno nacional hasta el año pasado es importante pero lo consideran insuficiente. Las inversiones en áreas tan sensibles como vivienda, educación, salud, producción y vías dejan mucho que desear; el desplazamiento, confinamiento y reclutamiento no desaparecen y los grupos armados ilegales siguen presentes. Además, faltó participación y control en la adopción y ejecución de acciones y obras, así como en su evaluación y seguimiento; hay desconfianza mutua entre la fuerza pública y la población, hubo poca coordinación interinstitucional, la justicia adolece de muchas fallas, las reuniones de la población eran vigiladas, las instancias gubernamentales son débiles, lentas y despreocupadas.

## ■ ... al Plan nacional de consolidación

Cuatro años después el gobierno aprobó el Plan Nacional de Consolidación y en el 2011 entró a operar la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación y Reconstrucción Territorial. Una de las oficinas funciona en Montería, la Gerencia regional Nudo de Paramillo, que atiende los cinco municipios del sur de Córdoba incluidos en el Plan (Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré) y diez de Antioquia (Ituango, Valdivia, Briceño, Anorí, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Tarazá, Cáceres y Cauca).

Las Zonas de consolidación las caracterizan por tener “débil presencia institucional, alta vulneración de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, presencia de cultivos ilícitos, centros de acción del terrorismo, narcotráfico y sus interconexiones y dependencia de la población frente a economías ilícitas”. En reunión efectuada el pasado 23 de abril la Gerencia en Montería precisó los componentes, el plan de acción y los retos. En los componentes aparecen la institucionalización del territorio, la participación ciudadana y buen gobierno y la integración regional. El Plan de acción está basado en el fortalecimiento de la fuerza pública, erradicación de cultivos de uso ilícito, formalización de la explotación minera artesanal, tenencia de la tierra y ordenamiento territorial, presencia y operatividad de la justicia formal y no formal, reparación y reconciliación, reforzar la gobernabilidad, organización y participación ciudadana, productividad, infraestructura y conectividad. Dentro de los retos figuran la recuperación del Parque natural nacional



Paramillo, asegurar áreas libres de cultivos de uso ilícito y la sustracción de áreas de la reserva del Pacífico, entre otros.

De acuerdo con la información suministrada el Plan atenderá 532 veredas de los 15 municipios priorizados. Mediante el empleo de semaforización en el tema de seguridad, encontraron que el 42.8% de ellas están en rojo (alto riesgo en orden público, cultivos ilícitos y movilidad), el 56.6% en amarillo (con presencia de fuerza pública, poca incidencia de grupos armados ilegales y cierta movilidad por parte de los habitantes) y el 0.6% en verde (con presencia de fuerza pública y ausencia de grupos armados ilegales). Para el caso de los municipios del sur ninguno está en verde: Tierralta tiene 31 en rojo y 35 en amarillo; Puerto Libertador 30 en rojo y 8 en amarillo; Montelíbano 9 en rojo y 4 en amarillo; San José de Uré 3 en rojo y 32 en amarillo y Valencia 29 en amarillo.

Muchos están de acuerdo que los desafíos son grandes y ambiciosos los propósitos del Plan. Hasta ahora cuentan con recursos gestionados por valor de 42.682 millones de pesos. ¿Qué tiempo demandará la ejecución de estos programas con el nuevo enfoque si el proceso lleva ya 8 años y lo logrado no es tan satisfactorio?, ¿qué aspectos, criterios y metodologías están empleando ahora que ya no es una instancia de coordinación intergerencial como el CCAI sino una política de Estado que permite mejores resultados?

## Algunos aspectos de la vieja y cruda realidad

### **LA TIERRA**

El himno del municipio de Montelíbano dice que Dios engendró la riqueza en su suelo para colmar a sus pobladores de dicha y valor. Sin embargo la historia cuenta que no ha sido así para la inmensa mayoría de su gente. A pesar de lo aislada y retirada de la zona, antes de 1740 las autoridades españolas habían concedido un inmenso globo de tierras, calculado en más de 150 mil hectáreas, llamado terrenos de Uré, al capitán Alonso Gil por sus servicios prestados, con la obligación de explotar las minas de oro del lugar. No tuvieron en cuenta las posesiones de los negros y algunos reductos indígenas. Con el tiempo, ante la imposibilidad de administrar y controlar semejante territorio,

la insubordinación de los negros esclavos y la llegada de tandas de colonos de diferentes lugares, los sucesivos “propietarios” fueron cediendo hasta que en 1960 el dominio sobre la tierra llegó a su fin, cuando el mismo gobierno principió a conceder títulos de baldíos.. Esto explica que en 1949 existieran en el área 254 fincas entre 0 y 99 hectáreas, 123 entre 100 y 199, 40 entre 200 y 299, 22 entre 300 y 399, 12 entre 400 y 499 y 16 entre 500 y más hectáreas, una de estas últimas medía 4.135 hectáreas, según el censo de ocupantes ordenado por la Oficina de Catastro de Bolívar. Lo que nos demuestra que la concentración de la tierra viene de vieja data.

Para la misma época autoridades antioqueñas clausuraron la colonia penal de Antadó en el municipio de Ituango, en límites con Montelíbano. Los presidarios, ya libres, fueron alentados a colonizar las partes altas de los ríos Sinú y San Jorge. Al tiempo y en otro lugar un grupo de campesinos se organizaron en el Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge con el propósito de ocupar baldíos, proteger tierras ocupadas y recuperar las usurpadas por hacendados y comerciantes. Fueron los años de la violencia entre los partidos liberal y conservador con el surgimiento de las guerrillas liberales de Julio Guerra en Montelíbano y Puerto Libertador y la de Mariano Sandón en Tierralta. En 1967 irrumpió el Ejército Popular de Liberación EPL, lo que ocasionó que el alto Sinú y San Jorge fueran declarado zona de guerra.

Semejante situación afectó el proceso económico, político y social de toda la zona. La posesión y concentración de la tierra fue el objetivo principal de comerciantes, políticos y hacendados. A medida que lo consiguieron ampliaron la ganadería extensiva y por consiguiente, directa o indirectamente, redujeron el comercio del arroz y maíz, disminuyeron los cultivos temporales por la pérdida de unidades de explotación en arrendamiento, aparcería y colonato y propiciaron la emigración de población rural, según lo demuestran los censos agropecuarios de Montelíbano de 1960 y 1970-71.

En el periodo 1963-2003, tiempo de funcionamiento del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora en Córdoba, tituló en los cinco municipios 178.517,5 hectáreas de baldíos a 4.346 familias y adjudicó 79 predios de 36.223,2 hectáreas a 2.167 familias. Actualmente la tenencia de la tierra por rangos de superficie está distribuida de la siguiente manera según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi:

## TENENCIA DE LA TIERRA POR RANGOS DE SUPERFICIE

MUNICIPIO	PREDIOS			PROPIETARIOS			SUPERFICIE		
	1 a 10	10 a 200	200 a más	1 a 10	10 a 200	200 a más	1 a 10	10 a 200	200 a más
MONTELÍBANO	1.126	1.457	89	1.302	1.814	133	2.026	58.142	38.601
PUERTO LIBERTADOR	1.924	1.595	65	1.990	2.002	103	2.810	70.153	24.479
SAN JOSÉ DE URÉ	4.476	2.068	100	3.350	2.467	128	10.096	96.053	151.857
TIERRALTA	1.684	1.070	66	1.869	1.434	145	6.049	40.483	34.500
VALENCIA	482	407	39	609	496	125	1.088	15.408	13.321
TOTAL MUNICIPIOS	9.692	6.597	359	9.120	8.213	634	22.069	280.239	262.758
TOTAL ITEMS	16.648*			17.967*			565.036		
CÓRDOBA	124.544*			152.100*			2.082.887		

Fuente: Igac, 2012.

En resumen la situación es la siguiente: a) 9.120 pequeños propietarios poseen 22.069 hectáreas, el 3.9% de la tierra total; b) 8.213 medianos propietarios tienen 280.239 hectáreas, el 49.5% del total; c) 634 grandes propietarios cuentan con 262.758 hectáreas, el 46.5% del total. Es decir, hay concentración de la tierra, puesto que el 3.5% de los propietarios son dueños de casi la mitad de la tierra. También llama la atención el alto porcentaje que está en manos de los medianos propietarios. Entre estos hay muchos vulnerables que, sin ningún apoyo, claudican ante las amenazas de unos y ofrecimientos de otros. En el otro extremo, los que cuentan con posibilidades para mantenerse en la zona y adquirir nuevos predios por medios legales e ilegales.

La zona ha pasado por las siguientes etapas: 1. Colonización y asentamientos. 2. Agricultura de subsistencia y minería artesanal. 3. Ganadería extensiva y agricultura de pancoger y comercial. 4. Cultivos de uso ilícito. 5. Gran minería (ferróniquel, carbón y oro). En la actualidad es la que predomina, al lado de la ganadería extensiva, cultivos forestales, agroindustriales, agrícolas y de uso ilícito. En cada una de estas etapas la tenencia y uso de la tierra ha experimentado cambios, especialmente en esta de la gran minería. La actividad económica más afectada, sin duda alguna, ha sido la agricultura, tanto la de pancoger como la comercial: la ganadería le arrebató espacio, mientras la coca y minería les quitaron espacio y mano de obra.

Estos hechos suscitan reflexiones. Tomemos por ejemplo el caso del Incora que entregó 214.740 hectáreas entre adjudicaciones y titulación de baldíos. Según funcionarios del desaparecido Incora y ahora del Incoder, el instituto que lo reemplazó, más del 60% de esas tierras no pertenecen a los benefi-

ciarios iniciales. Las razones expuestas son variadas: ventas forzadas o voluntarias, amenazas, extorsión, desplazamiento, homicidios, reclutamiento, desapariciones, abandono o despojo. Y si nos vamos más atrás, la violencia fue el medio más utilizado para hacerse a los predios. Con total impunidad impusieron las leyes del silencio y el más fuerte, debido al aislamiento en que se mantuvo la zona, la colonización, el poblamiento tardío, la inseguridad permanente por parte de grupos armados ilegales de distintas concepciones e intereses, en síntesis, la ausencia casi total del Estado.

Por esta y otras razones preguntamos: ¿qué área de tierra está protegida en la zona?, ¿hasta qué punto son efectivas estas medidas? De seguir el auge minero-energético-forestal, el avance de los cultivos agroindustriales, persistan los sembrados de coca y sigan presentes los grupos armados ilegales, es previsible que aumente el área de los medianos y grandes propietarios a costa del área de los pequeños y los más vulnerables de los medianos. Los primeros tratarán de asegurar la posesión, ampliarla si es posible y valorizarla. ¿Qué medidas están tomando para proteger las propiedades de los pequeños propietarios y los más indefensos de los medianos. Sobre todo ahora cuando se afirma que la restitución de tierras comenzará por los municipios que atiende el Plan Nacional de Consolidación. Hasta el 13 de abril pasado en Córdoba habían inscrito 569 solicitudes de restitución de tierras y Tierralta aparece como uno de los municipios más despojados y abandonados con 4.425 hectáreas, según la Unidad de Restitución de Tierras.

## **LOS HOMICIDIOS Y LA INSEGURIDAD**

En el período 2006-2011 hubo en la zona 876 homicidios: 319 en Montelíbano, 272 en Tierralta, 207 en Puerto Libertador, 58 en Valencia y 20 en el nuevo municipio de San José de Uré, segregado de Montelíbano. Esta cifra representó el 31.2% de los homicidios en Córdoba. Los años críticos fueron el 2011, el año pasado, con 207 homicidios y 2008 con 190. La inseguridad en general preocupa a la población por el empleo de granadas en los atentados, las minas antipersonales, así como el incremento de casos de lesiones comunes, extorsión, amenazas, hurto a personas, residencias y comercio, venta y consumo de drogas y prostitución. La falta de datos confiables en la mayoría de los casos es una falla que debe corregirse rápidamente. El siguiente cuadro nos ilustra sobre el número de homicidios sucedidos en la zona.

## HOMICIDIOS MUNICIPIOS DEL SUR 2006 - 2011

MUNICIPIOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL MUNICIPIOS
MONTELÍBANO	40	38	56	33	67	85	319
PUERTO LIBERTADOR	13	44	49	16	40	45	207
TIERRALTA	46	60	51	20	31	64	272
VALENCIA	4	6	32	4	7	5	58
SAN JOSÉ DE URÉ	*	*	4	6	2	8	20

*Fuentes: Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, Montería, 2012 y Observatorio del delito Gobernación Córdoba, 2011. - \*No existía como municipio*

Mucha gente no entiende por qué suceden estos hechos en la zona más resguardada por la fuerza pública, puesto que allí actuó el Comando operativo especial de seguridad ciudadana del bajo Cauca antioqueño, creado por la Policía en septiembre del 2009 con unidades operativas de Córdoba y Antioquia. Del primero hicieron parte las Estaciones de Policía de Montelíbano, Puerto Libertador, Ayapel, Uré, La Apartada y la subestación Tierradentro. Del segundo las Estaciones de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza y la subestación La Caucana. La creación obedeció “a la importancia estratégica que tiene la zona para la economía del país, la confluencia de conflictos de tipo social, político y de orden público, así como el incremento de los índices delincuenciales”. Al parecer por motivos administrativos dejó de operar poco tiempo después. También han hecho presencia en la zona el CCAI, hoy Plan de Consolidación, Operación Troya con intervención de la Policía, Ejército, Armada y el DAS en un principio, Operación Medusa adelantada por el Ejército y la seguridad que protege el complejo de Cerro Matoso en Montelíbano, la hidroeléctrica de Urrá y la penitenciaria en Tierralta y la carboeléctrica en construcción de la empresa Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe, Gecelca.

La Operación Medusa la adelanta la Fuerza de Tarea Conjunta “Nudo de Paramillo”, integrada por 4.572 hombres del ejército en la zona comprendida entre Montelíbano y Puerto Libertador en Córdoba y Tarazá e Ituango en Antioquia. De acuerdo con los mandos “en esta zona se ubican las estructuras más fuertes del bloque noroccidental de las Farc, con mayor poder de combate y fuente de financiación...es considerada como área de retaguardia y acumulación estratégica, además de corredor de movilidad con salida al mar Caribe... los principales objetivos que persiguen son debilitar los frentes 5, 18 y 58 de las Farc y la erradicación de cultivos de uso ilícito”.

En Montelíbano, el municipio más desarrollado de la zona y donde más han ocurrido homicidios en los últimos años, el alcalde Gabriel Calle De Moya, conoce muy bien el riesgo en que se encuentra el municipio y la zona por la semaforización en seguridad que hizo la fuerza pública. Sin embargo, asegura que cuenta con un comando de Policía insuficiente, conformado por tres oficiales, seis suboficiales y 42 patrulleros, dotados con nueve carros y 13 motos, cuatro de ellas en mal estado, lo que no les permite brindar mayor seguridad. Y ¿el resto de los municipios?. El aumento constante o intermitente del pie de fuerza e inteligencia como prioridad fundamental en estas zonas de conflicto no ha dado resultados. Las lecciones por las que hemos pasado nos ofrecen lecciones importantes que debemos tener en cuenta y aplicar si queremos construir el verdadero Plan que requieren los municipios del sur.

## LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

En el periodo 2006-2011 hubo en la zona 43.609 desplazados por la violencia, el 72.6% del total en el departamento. Los años críticos fueron el 2008 con 11.759 y el 2007 con 7.740, como lo vemos en el siguiente cuadro:

**DESPLAZADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR 2006 - 2011**

MUNICIPIOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL MUNICIPIOS
MONTELÍBANO	2417	1273	1857	1340	2014	2615	11.516
PUERTO LIBERTADOR	1604	1828	4731	1539	1278	1180	12.160
TIERRALTA	1994	3138	3864	2072	1312	2757	15.137
VALENCIA	621	1449	1244	576	198	158	4.246
SAN JOSÉ DE URÉ	19	52	63	207	106	103	550
TOTAL POR AÑOS	6655	7740	11759	5734	4908	6813	43609
CÓRDOBA	8398	9633	14093	8679	8993	10257	60.053

*Fuentes: Departamento para la Prosperidad Social. Unidad para Víctimas de la Violencia 2012*

¿Cuál es la explicación al respecto?, ¿dónde están estas familias y cómo se encuentran?, ¿qué piensa hacer el Plan de Consolidación con ellas?, ¿qué pasó con sus tierras?, ¿si retornan cuentan con la debida seguridad y el bienestar que merecen?

## LO MINERO-ENERGÉTICO

Según observaciones, estudios preliminares y definitivos contamos con níquel, hierro, carbón, oro, hidrocarburos, calizas, arcilla, yeso, arenas cuarzosas, asbesto, cobalto, cobre, cromo, mármol y materiales para la construcción. Hace 24 años escribí en el editorial de La Revista número 8 de la Academia de Historia de Córdoba (marzo de 1988) que “el departamento y la Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge CVS se han quedado cortos en la definición y aplicación de políticas y mecanismos de control para la explotación de nuestros minerales. Así encontramos que los estudios de impacto ambiental son escasos y no hay seguimiento de sus consecuencias, no se sabe hasta dónde va la contaminación de las aguas y las tierras por efecto de la extracción y se ignora por completo las condiciones técnicas, sociales y económicas de los pequeños mineros. Falta pues, un inventario minero, medidas de asistencia técnica y fiscalización de las explotaciones”. Esto pues no es nuevo. Viene de muchos años atrás.

Les informo o recuerdo que la explotación minera empezó en 1742, aunque existen datos de 13 minas de oro y 2 de cobre, las más importantes fueron Rá, El Penal, La Antigua o El Alacrán, todavía activa, Soledad y Uré. En cuanto el carbón, desde hace más de 120 años se sabía de la existencia de un gran yacimiento, Luis Striffler lo reseñó en su obra El río San Jorge. En 1943, grupos de técnicos hicieron las primeras visitas a los sitios reseñados y un año después las primeras exploraciones de superficie. Hubo negociaciones e intentos fallidos hasta 1982 cuando comenzó la explotación con la presencia de las empresas Carbones del Caribe y Carbones de Colombia S.A. En 1956 descubrieron los ricos yacimientos de níquel, hierro y otros minerales en Cerro Matoso, ocupado entonces por Villa Matoso con 500 habitantes que terminó desplazada a un basurero de la cabecera municipal. También se presentaron negociaciones y litigios hasta cuando principió la explotación en 1982.

Hoy en día Córdoba es el tercer productor de carbón en el país después de la Guajira y Cesar con reservas probadas de 378.5 millones de toneladas. La empresa Gecelca está construyendo una termoeléctrica en Puerto Libertador con capacidad de 164 megavatios que debe entrar en operación el próximo año y le fue asignada una segunda en el mismo municipio con capacidad de 250 megavatios para operar en el 2016. Empresas chinas son las encargadas de fabricar los principales equipos como caldera, turbina y generador. Cerro Matoso termina sus primeros 30 años de concesión el próximo mes de octubre.



En la actualidad produce 50.000 toneladas de ferroníquel. De todos es sabido la contaminación que produce en algunas fuentes de agua y el no pago de impuestos por aprovechamiento del hierro que utiliza en la aleación con níquel. En estos momentos discute con el gobierno nacional los términos de la nueva concesión y cosa rara: ni los municipios donde se encuentra el yacimiento ni el departamento tienen ninguna representación en estas negociaciones. La explotación legal e ilegal del oro con gran maquinaria ha causado enormes daños ambientales en la zona. Grupos y empresas nacionales y canadienses se encuentran en los territorios, aparentemente sin ningún control por parte de autoridades locales ni nacionales.

De nuevo surgen preguntas: ¿quién o quienes deben informar sobre lo que pasa con cada uno de los recursos que están siendo explotados?; existen datos sin confirmar sobre títulos concedidos y solicitados en gran parte del departamento... ¿a nombre de quién aparecen, lugar, recursos y obligaciones, entre otros? Y otras más específicas: ¿a qué se debe que los alcaldes de la zona, con la excepción de Montelíbano, concejos municipales y grupos políticos no estén interesados en coordinar acciones para velar por los recursos naturales?; ¿por qué razones no han creado en la zona o el departamento una secretaría minera zonal o departamental que se haga cargo del conocimiento y manejo de estos recursos?; ¿por qué la CVS no le ha prestado la suficiente atención al San Jorge como lo ha hecho con la cuenca del río Sinú?. Para no olvidar están los casos de la gran emergencia ocasionada por la avalancha de lodo sucedida en la parte alta del río San Jorge en marzo de 1997 que afectó numerosas poblaciones ribereñas de Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar, que a pesar de la declaratoria del estado de situación de calamidad pública (resolución 001 de abril 15 de 1997 de la Dirección nacional para la prevención y atención de desastres) nunca hicieron lo suficiente para atender y superar la emergencia; la desaparición de las grandes subidas de peces del San Jorge que dejó en el olvido a poblaciones como Marralú y Segebe, entre muchas más y desde hace años el silencio ante los efectos producidos por la explotación minera, ahí están como muestras vivas, entre otras, las quebradas Las Claras, Río Verde, La Jagua, Las Claritas, La Rica y el El Salado en el río San Pedro y Soledad, La Llave, Río Sucio y todo el trayecto del río San Jorge desde La Angostura hasta cerca de Puerto Belén que fue dañado y desviado. Algo más: ¿cuál es su opinión sobre la licencia de construcción de la termoeléctrica otorgada a Gecelca por la Secretaría de Infraestructura de Puerto Libertador?; ¿qué sucede que no asesora o apoya a los alcaldes de la zona para que hagan presencia por derecho propio en las reuniones de negociación que definen la suerte de nuestros re-



cursos naturales? Para terminar: dentro de los retos del Plan están la recuperación del Parque natural nacional Paramillo y la sustracción de áreas de reserva del Pacífico... ¿qué significa esto?, ¿en realidad qué es lo que quieren lograr? En el mundo y en Colombia son bien conocidos los efectos de la explotación de minas de carbón a cielo abierto. Alguien debe informar y tomar medidas por los efectos producidos por estas minas, aún más si tenemos en cuenta los estudios realizados por la Universidad del Sinú que confirman que “existe suficiente evidencia para demostrar que las actividades de minería de carbón realizadas en Puerto Libertador liberan al medio sustancias capaces de generar daño en el material genético de las poblaciones humanas y animales en su cercanía, es decir, se encuentran en riesgo más elevado de padecer o desarrollar diferentes tipos de cáncer comparados con poblaciones no expuestas”. ¿Quién conoce la licencia ambiental concedida a Gecelca y vigila su cumplimiento estricto?, entre otras razones por la cercanía del río San Jorge y algunas poblaciones.

Córdoba es paso obligado en la interconexión eléctrica Colombia-Panamá, unirá la subestación Cerro Matoso con su similar Panamá II y dentro de lo proyectado por el gobierno nacional aparecen carreteras y la construcción de una línea férrea que unirá a Barrancabermeja con Cupica en el Pacífico, pasando por el sur de Córdoba. Los cambios siguen sucediendo de manera acelerada en el Departamento, en especial en los municipios del sur y no contamos con un plan para hacerle frente con éxito para bien de la mayoría de la población. El uso y tenencia de tierra, las transformaciones que están sucediendo en las áreas urbanas y rurales de Puerto Libertador, ya conocemos lo sucedido en Montelíbano con Cerro Matoso y Tierralta con la hidroeléctrica de Urrá, las actividades económicas, la producción, el empleo, la seguridad, el aumento de población, el reordenamiento de las veredas y corregimientos y en medio de este torbellino el conflicto con sus actores armados ilegales, las víctimas de todo tipo, las administraciones locales débiles y expuestas a intereses opuestos al bien público, la legalidad y la ética.

## Características de la pobreza extrema en la zona

Veamos los datos de la Agencia nacional para la superación de la pobreza extrema en su estado de avance en la gestión de logros en el sur de Córdoba en el periodo 2009-2012. (San José de Uré todavía no aparece como municipio, está incluido en Montelíbano). En su conjunto la población atendida en el programa es de 94.479 personas, el 21.6% del total atendido en el departamento que llega a 444.371 personas. De las primeras el 29.9% son desplazados por la violencia, el 5.9% son discapacitados, la jefatura del 38.2% de los hogares está en manos de mujeres solas, el 47.6% son menores de edad, el 7.7% indígenas y el 18.6% negros. El porcentaje de embarazos de adolescentes llega al 18%, el analfabetismo al 22.6% y el funcional al 34.1%, la tasa de desempleo al 42.7% y la informalidad laboral al 120.6%.

En el siguiente cuadro están desagregadas por municipio estas y otras características de la pobreza extrema en la zona.

### CARACTERÍSTICAS POBREZA EXTREMA MUNICIPIOS DEL SUR

INDICADORES	MONTIELIBANO	PUERTO LIBERTADOR	TIERRALTA	VALENCIA
NÚMERO DE PERSONAS	26.772	14.607	35.934	17.166
NÚMERO DE FAMILIAS	6.995	3.435	8.987	4.432
PROMEDIO DE INTEGRANTES	3,8	4,3	4,0	3,9
PORCENTAJE DE MUJERES	49,9%	48,1%	49,1%	48,1%
PORCENTAJE DE DESPLAZADOS	21,2%	41,2%	19,2%	38,2%
PROMEDIO DE EDAD	24,6	24,4	25,1%	26,1%
PORCENTAJE CABECERA	71,1%	39,9%	55,2%	44,3%
PORCENTAJE RESTO	28,9%	60,1%	44,8%	55,7%
JEFATURA FEMENINA	50,0%	37,0%	33,0%	33,0%
PORCENTAJE MENORES DE EDAD	46,3%	49,8%	47,7%	46,6%
INDÍGENAS	8,1%	21,0%	0,8%	1,0%
AFROS	18,7%	15,6%	8,1%	32,0%
TASA DE DESEMPLEO	43,8%	42,3%	41,7%	43,2%
INFORMALIDAD LABORAL	67,6%	152,5%	108,7%	153,8%
PERSONAS DISCAPACITADAS	6,6%	4,1%	5,0%	7,9%
EMBARAZO ADOLESCENTES	18,4%	15,6%	20,5%	17,8%
ANALFABETISMO	20,2%	25,4%	23,5%	21,4%
ANALFABETISMO FUNCIONAL	31,6%	38,8%	33,6%	32,6%

Fuente: Agencia Nacional para la superación de la pobreza extrema. Estado de avance en la gestión de logros. Montería, 2012

¿Qué hacer ante esta realidad tan apabullante y compleja? Distintos gobiernos a todos los niveles, unos más que otros, han intentado superar la pobreza pero los hechos son tozudos y el porcentaje de pobres se mantiene alto. Uno de los programas bandera del anterior y actual gobierno es el de Unidos, antes llamado Juntos. En la actualidad atienden 35.631 familias en la zona, el 17.7% del total departamental que suma 200.246. De las primeras, 25.988 pertenecen al nivel I del Sisben (Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales) y 9.643 son desplazados. Actualmente en la zona atienden 16.060 menores entre 0 y 7 años para atención en salud y 32.151 entre 7 y 17 años para estudios de primaria y secundaria. A cada familia de los primeros le entregan 100 mil pesos mensuales y a los segundos 30.000 pesos mensuales por cada niño que estudia primaria y 60.000 si estudia secundaria. El total departamental de menores atendidos es 274.121.

¿Cuál es el impacto de este programa?, ¿logró reducir la pobreza?, ¿qué metodología e indicadores utilizaron?

## Los antecedentes. El Plan Nacional de Rehabilitación

El Plan Nacional de Rehabilitación PNR (1982-1994) mantuvo vigencia durante los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria. “Con la llegada de Belisario Betancur a la jefatura de gobierno hubo un cambio en el tratamiento del problema de la guerrilla. En noviembre de 1982 expidió la ley número 35, conocida también con el nombre de Amnistía para la paz, por la cual decretó una amnistía y dictó normas para el establecimiento y preservación de la paz”. El gobierno “reconoció en el atraso económico, el abandono estatal y la pobreza, condiciones objetivas para la aparición de la violencia guerrillera y consideró la reincorporación a la vida civil de las personas alzadas en armas, el fortalecimiento de la presencia del Estado y la inversión pública en las zonas más afectadas por problemas sociales y económicos como parte de las estrategias para conseguir la paz”, según las Memorias del PNR. En consecuencia, para los municipios del sur adelantaron programas de adquisición y dotación de tierras para campesinos y desmovilizados de origen campesino, mejoramiento de vías importantes como La Rica-Tierradentro y Puerto Libertador-Juan José, construcción del puente Tierradentro-Puerto López sobre el río San Jorge, derribado por la corriente años después y vuelto a construir pasada más de una década de larga espera. También hicieron vías

veredales, letrinas, represas, microacueductos, electrificaron pueblos, rehabilitaron escuelas y puestos de salud.

Fuera de las obras efectuadas la experiencia fue interesante por lo siguiente: a) La comunidad estaba organizada, especialmente en Juntas de Acción Comunal. b) Las organizaciones contrataban directamente con el gobierno la ejecución de algunas obras y ejercían poder real de participación, control y decisión. c) La guerrilla del EPL respetaba las organizaciones y estaba al tanto de la realización de las obras. d) La iglesia y el Sena eran garantes, además, del buen manejo de los recursos, el cumplimiento y calidad de las obras y acciones. Sin embargo, cuando el gobierno dejó de contratar con las organizaciones causó una profunda desmotivación en ellas, facilitando el incremento de los casos de corrupción y obras mal hechas o inconclusas por parte de las alcaldías y sus contratistas. Al final no bastaron las obras, por importante que fueron, porque la violencia, pobreza, aislamiento y la desigualdad continuaron hasta el presente.

## ■ Algunos casos del presente

1. Hace pocos días estuvo en Colombia Adam Isacson, coordinador del Programa de Políticas de Seguridad Regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), una de las ONG más grande de Estados Unidos. Sobre los Planes de consolidación expresó “En 2006 y 2007, cuando acabó el Plan Colombia, se replanteó la estrategia en la lucha contra las drogas. Los planes de consolidación, que fueron un aporte del Comando Sur, crearon perímetros de seguridad para que detrás de la tropa, por lo menos en el papel, progresivamente entren las otras entidades del Estado: infraestructura, fiscales, jueces, maestros y así, poco a poco, los soldados se vayan retirando y el Estado llegue a donde nunca había llegado. Sin embargo, no se están dando los resultados esperados”. (El Espectador, 23-5-12, pág. 8).

2. En días pasados llegó a Montería procedente de los municipios del sur, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, una delegación compuesta por 56 personas, entre ellas gobernadores de cabildos indígenas, miembros de Juntas de Acción Comunal, campesinos, algunos desplazados y colonos, a entrevistarse con representantes de organismos de cooperación internacional, Defensoría del Pueblo y funcionarios del Departamento para la Prosperidad Social. Dijeron estar desesperados por la situación sin salida que viven en la zona y la falta

de apoyo por parte de las alcaldías, gobernación del departamento e instituciones nacionales. De inmediato enumeraron sus problemas: 1. El empleo de glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito, causándoles enormes daños a sus sembrados de pancoger, incluso, no se explican por qué fumigan en lugares donde no hay coca y sí parcelas campesinas en producción. 2. Las Farc, Paisas y Aguilas les restringen movilidad a lugares de siembra por estar minados los terrenos, limitándoles la producción a sus propios predios, de por sí insuficientes. 3. Llamam la atención sobre la posibilidad que en la zona estén conformando grupos armados antirrestitución de tierras. 4. Reclaman les mejoren las vías de acceso, doten los puestos de salud y nombren médicos y enfermeras, construyan o reparen escuelas y designen maestros, adelanten proyectos productivos que garanticen seguridad alimentaria y mejoramiento económico. 5. Las autoridades no sigan estigmatizando los líderes campesinos e indígenas como guerrilleros o “paracos”. 6. Detengan o controlen la explotación de oro con gran maquinaria por el perjuicio irreparable que están causando a numerosas quebradas de los ríos San Pedro y San Jorge y sus territorios anexos, dejándolos sin agua para consumir ni tierra para cultivar. 7. Los efectos de la explotación de las minas de carbón en Puerto Libertador ya empiezan a sentirse en el cabildo Unión Matoso, al presentarse casos de fatiga y afecciones en la piel ocasionados al parecer por el polvillo que producen y se esparce en el área. 8. La inseguridad de la zona a pesar de la disminución de los homicidios en lo que va del año. 9. El Plan de consolidación no se convierta en la “repetición de la repetidera” con tantos censos y estudios y pocos hechos y obras.

3. El alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle De Moya, dijo en una entrevista “que con la nueva ley de regalías va a resultar mejor para los municipios que tienen riqueza minera, no explotarla. Son más los perjuicios que los beneficios...No es rentable que la minería se siga explotando a tan alto impacto social. Por ejemplo, antes de llegar la empresa Cerro Matoso a Montelíbano les pertenecían los hoy municipios La Apartada y San José de Uré con una población de 13 mil habitantes. En la actualidad, sin esos municipios, tenemos 85 mil habitantes. Esto debido a la atracción de la empresa que no se ve reflejada en el desarrollo del municipio. En cambio, si vemos que cada día se nos crece el número de desplazados, cuya cifra está en 19.513 personas”. (El Meridiano de Córdoba, 27-5-12, pág. D)

Por todo lo anterior me pregunto una y otra vez: ¿cuál es Plan que ayudará a resolver los viejos y graves problemas del sur de Córdoba?

## El SILENCIO de la VIOLENCIA

Los pueblos de la violencia son callados y están abandonados... llenos de susurros, soledades y sollozos. La imagen que tengo de ellos la contemplé hace varios años, un mediodía de sequía bajo el ardiente sol de la costa. Eran callejones largos y solos, polvorientos y con terrones parecidos a piedras cortantes; a lado y lado, una tras otra, las casas viejas y averiadas con árboles y palmeras sin una hoja en movimiento y en algunas, ascendiendo con lentitud, rastros de humo gris de leña de fogones; perdido en el follaje el canto persistente de la torcaza, tan lleno de tristeza que hace llorar de nostalgia a los ausentes; alguien se asomó furtivo por una puerta entreabierta y a lo lejos un perro en mitad de la plaza se levantó somnoliento y sin prisa se alejó hasta perderse.

### Lo que observamos

Algo parecido vi hace poco en Bonito Viento, en lo que fue la Zona de Ubicación del municipio de Tierralta. Es corregimiento desde el año 1992, un año después de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación EPL y dos años antes de la aparición de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU. Hacen parte de él las veredas Carrizola con 88 casas dispersas;

Santa Rita o Machuca con 11 casas ocupadas de 32 que alcanzó a tener en otra época; Campamento con 15 casas; Cúcuta con 12 y El Torito con 20. Los Martínez, compuesta por 15 casas, desapareció durante el proceso por los hechos violentos que allí ocurrieron. En cuanto la cabecera, en el 2002 tenía 26 casas con 30 familias, en la actualidad hay 12 casas habitadas con igual número de familias, el resto está abandonado, a merced de la maleza. El pueblo cuenta, además, con una plaza, dos calles: una que conduce al corregimiento Nueva Granada y Tierralta y la otra a la vereda Cúcuta y el corregimiento El Caramelo, una escuela con 82 estudiantes de preescolar a quinto grado, una tienda, un billar y una cantina. A propósito de la educación: en las ocho sedes que funcionan en la llamada Zona de Ubicación el número de estudiantes pasó de 780 a 630 en el presente año. El pueblo aunque quiera no puede crecer, está rodeado de haciendas voraces por todas partes, las cercas con alambre con púas y hombres vigilantes o armados no lo permitirían.

Las casas son de techo de palma, piso de tierra, paredes de tablas y vena de coraza, de donde extraen la manteca negrita o aceite para suavizar el cabello y curar granos y carbuncos. Por lo regular las hacen con dos cuartos, sala y cocina. En los alares cuelgan canastas hechas con alambre o soportes de otros materiales con helechos, begonias o veraneras y algunas veces gajos con manzanos, guineos o plátanos. La mayoría tiene al lado de la vivienda un rancho pequeño que llaman en canillas, o sea, con techo y horcones sin paredes, que

usan para colgar la hamaca y descansar, atender visitas, comer, jugar dominó y cartas. Ya en el interior las paredes las cubren con afiches de reinas, cantantes y políticos, periódicos con modelos de carros y paisajes y en una esquina del cuarto o colgados encima del baúl las imágenes de la Virgen del Carmen y el Corazón de Jesús. En la sala colocan los retratos de los abuelos y los padres el día del casamiento o compromiso y de los niños que han recibido grados de estudios. En la mayoría de los patios hay matas ornamentales como el bonche, frutales como mangos, tamarindos, naranjas, papayas y hortalizas como habichuelas, berenjenas y ajíes. El mobiliario está formado por taburetes (asientos de madera y cuero de res), sillas plásticas, mesas rústicas, camas de madera, baúles con bases, el tinajero con su tinaja de barro para mantener fresca el agua con sus vasos de plástico, vidrio o metal, las vitrinas o alacenas donde guardan la loza y los utensilios de cocina.

En cuanto los servicios, el sistema de electrobomba que extrae agua de pozos subterráneos para llevarla a un tanque elevado y distribuirla por presión a través de tuberías no funciona desde hace cuatro años; la energía eléctrica es débil y funciona irregularmente; el baño lo componen la taza del sanitario, conectada al pozo séptico y el tanque con agua para evacuar la orina y excrementos y bañarse. Los medios de transporte son las motocicletas, una camioneta de 16 pasajeros sentados que sale para Tierralta situado a 30 kilómetros

**EL MOBILIARIO ESTÁ FORMADO POR TABURETES, SILLAS PLÁSTICAS, MESAS RÚSTICAS, CAMAS DE MADERA, BAÚLES CON BASES, EL TINAJERO PARA EL AGUA...**



por un valor de 7 mil pesos por cabeza y un bus de 28 pasajeros para Montería situado a 98 kilómetros por valor de 10 mil pesos persona, además de caballos y burros para distancias cortas. Ambos vehículos salen temprano en la mañana y regresan en la tarde si no llueve. Las vías son destapadas y en tiempos de lluvia terminan por ser intransitables.

No todos los hombres tienen oportunidad de jornalear ocasionalmente debido a la escasez de trabajo, edad o impedimentos físicos. El valor que les reconocen por día es de nueve mil pesos en jornada de seis a once de la mañana en labores de desmonte, desmaleza, arreglo de cercas, ordeño y siembra de maíz o arroz. Las mujeres dedicadas al hogar, lavando ropa ajena, vendiendo rifas o haciendo oficios en otras casas. En cualquier caso lo poco que reciben a duras penas les alcanza para sobrevivir. Los animales que mantienen en la casa y el patio son de gran ayuda en la alimentación, la entretención y compañía y la atención de otras necesidades, en especial los cerdos a los que consideran una especie de alcancía porque es a lo primero que acuden cuando suceden calamidades o emergencias. En cada vivienda por lo regular tienen gallinas, patos, perro, gato, pericos, loros y encerrados en jaulas canarios y picogordos. Los burros y caballos son pocos. La alimentación por lo regular consiste en plátano, yuca, huevo o queso en el desayuno; arroz, sopa con espagueti y huevos en el almuerzo; arroz con queso en la cena, acompañado de vez en cuando con presas de gallina, pato, cerdo o res.

## En la intimidad

En el pueblo, como ya es tradición, la presencia de grupos armados ilegales ha dividido a la comunidad en dos sectores: los que por ideología, interés, familiaridad, afecto, compromiso, conveniencia o forzados son miembros, colaboradores o simpatizantes del grupo presente y los que evitan tener relaciones estables o frecuentes con ellos sin darles a entender que exista oposición, desobediencia o inconformismo. Aunque los segundos son más numerosos, los primeros no dejan de crecer. Cada vez hay más gente del pueblo vinculada y por lo tanto con más acceso a los adolescentes y jóvenes a quienes tratan de reclutar a todo momento. Ambos sectores viven el miedo y la preocupación de diferentes maneras. Los primeros temen la llegada de las autoridades y otros grupos armados ilegales antagónicos, mientras los segundos les temen al grupo presente y a sus enemigos. Aunque se hablan y saludan, puesto que son vecinos y paisanos, las visitas y reuniones entre ellos son escasas y formales. La desconfianza es mutua, pues nadie sabe con exactitud qué están pensando y a quienes sirven. Las fiestas, reuniones, juegos y festejos ruidosos y francos hasta altas horas de la noche o el amanecer, tan comunes antes, desaparecieron. Los comentarios y averiguaciones sobre lo que sucede en el pueblo y sus alrededores son restringidos a familiares y amistades de rigurosa confianza. Las conversaciones ocurren en voz baja y con cambios de tema cuando alguien se acerca.

En el hogar y en ciertos momentos del día o la noche la pareja sola o con alguno de los hijos siente la necesidad de hablar, de expresar sus ideas, sentimientos y presentimientos. En susurros cuentan la presión en que se encuentran, los sueños que han tenido y las señales que han percibido, la tristeza que los agobia, la desesperanza a punto de llegar, el miedo que no los deja, el llanto que los alivia y la oración que los reconforta pero también confiesan los malos pensamientos que a veces los asalta. Hablan de sus relaciones como pareja, de la necesidad de permanecer juntos, apoyándose a todo momento en medio de la pobreza, de las dolencias y achaques por las condiciones de vida y la vejez, de promesas y planes que están seguros no van a lograr pero los anima a seguir...es entonces cuando ella le aprieta las manos y él cierra los ojos. Cuando llegan a los hijos el llanto silencioso es inevitable. Parece que vieran con claridad a través de las lágrimas el futuro que les espera y la imposibilidad de evitar que ello ocurra. Quedan en silencio un largo rato hasta cuando un perro ladra asustado, escuchan voces, un disparo y otra vez los murmullos de la noche. Tratemos de dormir le dice y cada uno en su puesto piensa en lo que les sucederá mañana.

## En Santafé RALITO la VIDA sigue en la mitad del CAOS

**U**na reconstrucción viva de la historia de las familias campesinas en un pueblo minúsculo de Córdoba antes, durante y después de la llegada y la salida de las guerrillas y de las autodefensas para quedarse hasta hoy en la violencia de siempre, en la pobreza de siempre y el abandono de siempre.

### Un pueblo célebre

Las familias que habitan el área conocida ahora con el nombre de Zona de Ubicación que se hizo célebre por su verdadero nombre, Santafe Ralito, el lugar donde se efectuó el proceso de negociación del gobierno de Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en Tierralta, Córdoba, han atravesado en los últimos cincuenta años por diferentes etapas que han transformado profundamente sus vidas.

Estas etapas han sido:

1. El aislamiento y abandono por parte del Estado (1960–2010).
2. La presencia de la guerrilla de izquierda, el Ejército Popular de Liberación EPL (1975-1991).
3. La conformación y fortalecimiento de las Autodefensas (1985-2006), incluido el proceso de negociación (2003-2006), y
4. La recomposición de las AUC (2006-2011). Al momento de iniciar el proceso, la Zona tenía un área de 368 kilómetros cuadrados, la conformaban seis corregimientos y 46 veredas con 1.714 viviendas y 8.643 habitantes. En la actualidad nadie sabe con exactitud cuál es su población.

### **AISLAMIENTO Y ABANDONO DEL ESTADO**

La presencia del Estado y los gobiernos departamentales y municipales por lo general ha sido mínima y esporádica. Al principio la autoridad local, los corregidores, limitaban su labor a evitar que las riñas entre vecinos pasaran a mayores, controlar los excesos de borrachos, las ocurrencias o travesuras de uno u otro loco o bobo que nunca faltan y de vez en cuando convocar a la comunidad a arreglar la vía o el puente; desmalezar el cementerio o la escuela; hacer colectas para sacar enfermos en hamacas o willys, mandar hacer ataúdes, mudar casas, organizar las fiestas patronales y servir de padrinos a cuantos amigos y conocidos lo solicitaran. Las creencias, costumbres, comidas, crianzas de niños, atención de enfermedades, fugas de enamorados o casamientos eran cosas típicas de pueblos campesinos costeños. Nadie tenía armas de fuego.

### **LAS FAMILIAS CAMPESINAS**

Los padres por lo general eran hombres mayores de 25 años dedicados al hogar y a las faenas del campo en grandes fincas y pequeñas parcelas. En las primeras servían de vaqueros, caseros o corraleros; era la mayoría. Las parcelas por lo regular eran propias, aunque también había arrendadas o cedidas por temporadas. En ellas sembraban productos de pancoger, hortalizas, frutas y mantenían animales para el servicio y el consumo.

La jornada de trabajo empezaba a las cinco de la mañana cuando salían de casa y terminaba a las tres o cuatro de la tarde con el regreso. Casi siempre llegaban con algo entre manos: barbasco y varitas de cogollo de palma de corozal para hacer escobas; palos de maderas finas para encabar hachas, cavadores, martillos; bejucos para hacer chocós y balayes; frutas, leña o cualquier animal para comer o tener como mascota.

No conocían el hambre. Tanta sencillez, tranquilidad y respeto por la vida los hizo alegres, enamorados, fiesteros y fanáticos de las peleas de gallos finos y de las corralejas. No sabían cómo, pero deseaban que sus hijos no siguieran el trabajo de jornalear, querían algo mejor para ellos, tanto varones como hembras.

Las madres pasaban de los 18 años y por lo regular llegaban a tener más de cuatro hijos. Dedicadas por entero al cuidado de la familia, a los oficios del hogar, a criar aves de corral y cerdos y a cultivar el jardín y las plantas aromáticas. Por lo regular las madres solteras eran cocineras o lavadoras de ropa en casa de familia con mejores condiciones económicas. Eran fieles, sumisas y recatadas.

Los hijos, obedientes, respetuosos y admiradores de sus padres. Aficionados al béisbol y al fútbol; en tiempos de verano organizaban campeonatos con

participación de los pueblos cercanos. Oyentes de programas musicales y deportivos en la radio. Ante la imposibilidad de seguir estudiando después de la primaria, la gran mayoría terminaba de jornalero de medianos y grandes propietarios.

## **LLEGA LA GUERRILLA**

A pesar de las deficiencias y desigualdades de la zona, la mayoría de la población no concebía otra forma de vida y mucho menos creía posible cambiarla. Por esta razón, cuando llegó la guerrilla del EPL hablando de las injusticias de los ricos contra los pobres, la corrupción de políticos y administradores del gobierno y el aprovechamiento de los gamonales, muchos se sorprendieron y atemorizaron por semejante osadía. Otro grupo, menos numeroso, expresó su apoyo por considerarlo justo.

Unos y otros quedaron convencidos de que las arengas de los guerrilleros no eran simples bravuconadas cuando mataron a varios trabajadores del desaparecido Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria en 1978 cerca de la zona y atacaron, dos años después, el puesto de policía de Santafé Ralito. Con el paso del tiempo las muertes y ajusticiamientos fueron hechos frecuentes.

Los padres asumieron diferentes actitudes. Algunos, preocupados por la situación, previendo el reclutamiento o la incorporación voluntaria de los hijos al grupo insurgente, trasladaron sus familias a Tierralta y Montería, la capital del departamento.

Otros acogieron con entusiasmo las ideas y propuestas del grupo armado; ingresaron a sus filas o permitieron que sus hijos lo hicieran. Se convirtieron

en simpatizantes o colaboradores. Hablaban de justicia social y fomentaban o hacían parte de organizaciones por reivindicaciones económicas y sociales. La mayoría optó por no manifestar respaldo ni rechazo abiertamente. Debieron acomodarse a la nueva situación. En silencio escuchaban los informes y discursos. Evitaban encontrarse o hablar con los comandantes y combatientes. Mermaron las salidas, las fiestas y juegos. La relación con los propietarios se volvió difícil y un tanto hipócrita.

Los primeros guerrilleros que llegaron a la zona fueron “cachacos” blancos y negros del Urabá antioqueño. Transcurrió poco tiempo para que los mestizos o trigueños del Alto Sinú también hicieran parte de este mosaico de combatientes.

A medida que la fuerza pública y los hacendados abandonaban el área, la presencia de la guerrilla fue haciéndose más notoria y frecuente, a tal punto que muchos de sus miembros dormían y permanecían en las veredas. Las madres debieron sortear muchas situaciones con el fin de mantener a sus hijos alejados de las influencias del grupo armado. Con afecto y atenciones intentaron retenerlos a su lado, muchas veces sin éxito.

Los hijos, con excepciones, dejaron de ser tímidos y respetuosos. Se volvieron atrevidos, independientes, los padres dejaron de ser ejemplo a seguir, los temas de las charlas cambiaron y el consumo de alcohol y cigarrillo aumentó entre los adolescentes y jóvenes. Relaciones amorosas de adolescentes y mujeres jóvenes con comandantes y combatientes se hicieron comunes.

## VIVIR CON LAS AUTODEFENSAS

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU primero y luego las AUC, llegaron a la zona a erradicar a la guerrilla y a establecer un nuevo poder. Los métodos que utilizaron fueron contundentes y bárbaros: masacres, ajusticiamiento y desplazamientos. Los simpatizantes y colaboradores fueron perseguidos y ultimados y al cabo de cierto tiempo el control sobre el área fue absoluto.

Los padres asumieron posiciones diferentes. Aquellos que habían tenido relaciones amistosas o de apoyo a la guerrilla abandonaron la zona. Las víctimas, los afectados y los que estaban en desacuerdo con la guerrilla, poco a poco expresaron su respaldo a la nueva fuerza.

Un número no precisado prefirió mantenerse al margen, aunque debieron acomodarse a otro ritmo y estilo de vida donde primó el arrepentimiento por haber convivido con la guerrilla, el respeto a la propiedad privada, la cautela al expresar ideas, la aceptación de normas y el acatamiento a las propuestas políticas de las nuevas fuerzas. ¿Seguimiento, apoyo real o ficticio? Difícil saberlo. Las madres no cesaban de llamar la atención de sus hijos para que no se vincularan a los recién llegados. Algunas los convencieron para salir a otros lugares, pero casi todas debieron soportar las groserías y atrevimientos de que eran objeto cuando les hacían observaciones o daban consejos.

Al final, en los últimos años, ante la pobreza y la imposibilidad de mejorar las condiciones de vida personal y familiar, hubo madres y padres que aceptaron el ingreso de sus hijos a las filas. Los hijos con capacidad para la guerra o las actividades complementarias estaban abocados a esta disyuntiva: hacer parte o no de las AUC. La mayoría ya había entendido que ser combatientes les permitía obtener pagos más altos que los jornales de las haciendas, vestir camuflados, usar armas y radios de comunicación, tener cierta autoridad y ser admirados.

Los adolescentes y jóvenes que a diario conversaban con los combatientes rason y mandos medios fueron los primeros en enterarse de las historias de sus vidas y la de los comandantes, los alias, el tipo de armamento, las experiencias vividas.



Se hablaba también de las haciendas y negocios que poseían los jefes, de los vehículos lujosos, de costales con dinero, de fiestas deslumbrantes, de bacanales con mujeres hermosas, de las relaciones con gobernantes, políticos, empresarios, comerciantes, periodistas, militares, jerarcas de la iglesia e intelectuales. Al vislumbrar tantas posibilidades en medio de las penurias y zozobras, los jóvenes quedaron sorprendidos. Desde ese momento ser paramilitar, para muchos, se convirtió en obsesión y metas de sus vidas.

## Escenario nacional

Ya en el proceso de negociación los pueblos de la zona pudieron constatar todo cuanto se decía del poder de los comandantes y sus grupos; algunos, incluso, ni siquiera imaginaron que fuera tanto.

“A Santafé Ralito lo convirtieron en un pueblo en feria permanente y a veces en sitio solemne y austero donde se debatía la suerte del país. Los pobladores, acostumbrados a su rutina de pueblo pobre y a una u otra fiesta o hecho ocasional, estaban abrumados, atosigados por gente extraña e importante que lo ocuparon sin pedir permiso e hicieron con él lo que les dio la gana en todos los sentidos”, manifestaron los líderes de la zona y Tierralta, la cabecera, porque no los tuvieron en cuenta durante todo el proceso.

## **Y LA VIOLENCIA SIGUE**

Terminadas las desmovilizaciones los padres de familia pensaron que recobrarían un poco de la tranquilidad perdida, pero bien pronto cayeron en cuenta que los no desmovilizados empezaron a reorganizarse.

Después fue obra de varios meses cuando notaron que desmovilizados activos y vinculados nuevos también se habían sumado, ya en calidad de combatientes e informantes, dotados con celulares, motos, armas y algunos vehículos.

Y otra vez el viacrucis: control de territorios, vacunas a finqueros, maestros y comerciantes; desplazamientos, amenazas; ajustes de cuentas a “sapos” o soplones, parientes o relacionados con el grupo enemigo y la angustia de los padres que, impotentes, no pueden impedir que los nuevos jefes, sobre todo los que no son de la Zona, se “encaprichen” con sus hijas adolescentes y jóvenes más bonitas. “A cualquier hora del día las mandan a buscar y las devuelven cuando quieren”, aseguran algunos padres condolidos por no tener posibilidades de salir de la zona y poder brindarles a los hijos un futuro mejor.

## **Y LA POBREZA SIGUE, Y EL ABANDONO SIGUE**

“El pueblo apenas sobrevive. No creo que se acabe porque la mayoría de los que vivimos aquí no tenemos para donde irnos; además, en este lugar tenemos enterrados a nuestros familiares y ni de vainas los vamos a dejar solos... ¿en manos de quién?”

- Los negocios (tiendas, cantinas, galleras y billares), servicios como el mototaxismo y las fiestas familiares y patronales han disminuido en un 90 por ciento.
- Los jornales son ocasionales, fluctúan entre ocho mil y nueve mil pesos diarios.
- Se ha reducido la cría de cerdos, pavos, gallinas y patos, que representaban algunos recursos económicos y mejoraban la dieta alimentaria, porque ya no pueden tenerlos sueltos por temor a que los maten si los ven comiendo lo que encuentran en las calles o la plaza o se metan a los patios ajenos. Tenerlos encerradas sale muy costoso.
- Hay casas abandonadas y deterioradas, casi no hay letrinas y pocas cuentan

con pozos sépticos, vías en mal estado, el agua es subterránea y la energía eléctrica deficiente.

- En educación, sólo en Los Volcanes hay hasta 11° grado, en los demás pueblos de la Zona llegan a noveno, faltan aulas, mobiliarios, ayudas educativas y la población estudiantil ha disminuido, lo mismo que la población en general.
- De los diferentes sectores de la población, los jóvenes manifiestan los cambios más notorios: indumentaria con camisas y pantalones anchos, vocabulario de combatientes y peinados y motilados diversos.
- Ningún puesto de salud tiene servicio permanente.
- De los proyectos productivos que impulsó el Sena, al parecer sólo funciona el de estanques para la cría de bocachico y cachama.
- Casi todas las jóvenes madres, con hijos de desmovilizados que siguieron viviendo en el pueblo, han salido a Montería o Tierralta en busca de oportunidades mejores.
- Las noches son un martirio, pocos logran conciliar el sueño de manera tranquila. Ladridos de perros asustados, vehículos, motos, voces, pisadas y huellas frescas que encuentran temprano al día siguiente alrededor de las casas mantienen en vela a muchos pobladores.
- Los conocimientos y experiencias acumuladas por estas comunidades durante tantos años los hace particularmente receptivos tanto a propuestas de desarrollo y paz, como de rebeldía contra la institucionalidad del país.

## El SUR de la Costa CARIBE a la espera de tiempos MEJORES

### Población y área

El sur de la Costa Caribe lo conforman los departamentos que hicieron parte del gran Bolívar, es decir, Bolívar, Córdoba y Sucre. Su población representa el 9.7% del total nacional y su área equivale al 5.4% de la superficie del país.

**POBLACIÓN Y ÁREA DE LOS DEPARTAMENTOS**

DEPARTAMENTOS	POB. TOTAL	CABECERA	RESTO	KILÓMETROS
CÓRDOBA	1.462.909	743.886	719.023	25.020
SUCRE	762.263	488.210	274.053	10.917
BOLÍVAR	1.836.640	1.406.807	429.833	25.978
TOTAL	4.061.812	2.638.903	1.422.909	61.915

## POBLACIÓN DE LAS CAPITALES

CAPITAL	POB. TOTAL	CABECERA	RESTO
MONTERÍA	381.525	288.192	93.333
SINCELEJO	236.780	218.430	18.350
CARTAGENA	895.400	845.801	49.599
TOTAL	1.513.705	1.352.423	161.282

Fuente: Dane, Censo 2005.

## Algo de historia y principales actividades económicas

### CÓRDOBA

- Las guerrillas liberales actuaron en los municipios del sur (Tierralta, Valencia, Montelíbano y Puerto Libertador) y Canalete entre los años 1949-1959.
- Las guerrillas de izquierda: el Ejército Popular de Liberación EPL nació en 1967 y desmovilizó en 1991. El Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT inicio actividades en 1976 y desmovilizó en 1994. La Corriente de Renovación Socialista CRS, disidencia del Ejército de Liberación Nacional ELN, apareció en 1989 y desmovilizó en 1994. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC hicieron presencia en 1980 y aún se mantienen.
- La Asociación Nacional de Usuario Campesinos ANUC en el período 1971-1974 adelantaron un vasto movimiento de lucha por la tierra.
- Las Autodefensas empezaron a tomar cuerpo con la llegada de Fidel Castaño en 1982. En 1994 constituyeron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU y en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Negociaron con el gobierno el desarme, la desmovilización y reinserción.
- La economía está basada en cultivos tradicionales como algodón, maíz, plátano, yuca y ñame. Están impulsando los agroindustriales como cacao, caucho, palma de aceite y plantaciones forestales (teca, acacia, roble). Sigue la minería con ferróniquel y en menos proporción carbón y oro. La ganadería extensiva predomina con más de la mitad de la tierra sembrada en pasto. Los cultivos de uso ilícito están localizados en los municipios del sur.

- Montería, la capital, presta servicios al Urabá antioqueño, bajo Cauca y golfo de Morrosquillo en educación superior, comercio, sistema bancario, medicina y ganadería

## SUCRE

- Las guerrillas de izquierda (FARC, PRT y ELN) se instalaron primero en el departamento de Sucre que en Córdoba. El Ejército Revolucionario del Pueblo ERP, disidencia del EPL surgió después de la desmovilización, sigue activo con poca presencia.
- Los paramilitares llegaron a mediados de los años 90.
- La lucha campesina de la ANUC fue intensa. En 1971, en el Segundo congreso de la Asociación nació la Línea Sincelejo, radicalizada en la lucha por la tierra, en contraposición de la oficialista Línea Armenia.
- La economía la sostienen las actividades agropecuarias con cultivos de pan-coger, tabaco, cacao, yuca y ganadería extensiva. Los cultivos de coca en la serranía de San Lucas ocupan mano de obra de los municipios del sur del departamento.

Cuentan con puerto marítimo, oleoducto Caño Limón-Coveñas, turismo, artesanías, fábrica de cemento y camaroneras. La Mojana, sigue siendo un potencial inexplorado.

- Con la llegada de las AUC la situación de orden público fue de tal envergadura que causó masacres, desplazamientos, parálisis económica, caos administrativo y crisis de gobernabilidad. El gobierno nacional para hacer frente a la perturbación declaró en septiembre del 2002 el Estado de conmoción interior, dando vida a las llamadas Zonas de rehabilitación y consolidación que afectó a municipios de Sucre, sur de Bolívar y Arauca.

La declaratoria contemplaba medidas excepcionales de orden público y obras prioritarias. Con la Zona hubo controles y retenes, verificación de identidades, inventario de vehículos, aparatos de comunicación y armas, patrullajes permanentes de tropas y capturas masivas de pobladores. Los excesos fueron tales que en abril del año siguiente la declararon ilegal. Hasta hace poco mantuvieron la restricción de circulación de transporte por la carretera que comunica a Sincelejo con los departamentos vecinos del norte.

## **BOLÍVAR**

- De las guerrillas de izquierda la primera que incursionó fue el ELN en 1972 por San Pablo, creció en la década de los 80 y primera mitad de los 90. Las FARC aparecieron a principio de los 80. El ERP tiene poca influencia, está localizado en el Carmen de Bolívar.
- Las Autodefensas surgieron desde mediados de los 80. A principios de los 90 empezaron a adoptar estructuras paramilitares en el sur, siguieron avanzando por los Montes de María hasta llegar al Canal del Dique en el norte.

Entre 1999 y el 2001 hubo una gran agitación social en el sur por la propuesta del ELN de desmilitarizar un área de influencia para con el fin de realizar la Convención nacional que proponían como principio de un acuerdo de paz. La protesta fue organizada por la Asociación civil para la paz, Asocipaz. La denominaron No al despeje. Hubo bloqueo de carreteras, paro de transporte y otras actividades. Como resultado la Convención no la realizaron.

Recordemos que entre el 2002 y 2003 la declaratoria de Zona de rehabilitación y consolidación afectó a varios municipios de los Montes de María.

- El sur de Bolívar es importante por el acceso a la serranía de San Lucas, al río Magdalena y al sistema vial de la troncal de occidente; por la extracción de oro, la ganadería extensiva y los cultivos de caña; por el tráfico de drogas por los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena y la riqueza hídrica.
- En los Montes de María predomina la economía agropecuaria. Durante varios años, el último fue hace dos años, cientos de campesinos de muchas

comunidades rurales del Carmen de Bolívar se han concentrado en la plaza principal para pedir el arreglo de las vías para poder sacar las cosechas de aguacate y ñame, maestros y materiales para escuelas, puestos de salud y vacunas contra la leishmaniasis y agua potable. Las negociaciones de cada año todavía no dan resultados.

## **POBLACIÓN DESPLAZADA**

De acuerdo con la oficina Acción Social de la Presidencia de la República, hasta el pasado 15 de octubre había en los tres departamentos 362.612 desplazados por el conflicto armado.

Estaban distribuidos de la siguiente manera: en Córdoba, 93.465 ; los municipios con mayor número de desplazados: Montería, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia, Planeta Rica y Cereté. En Bolívar: 145.327; los municipios con mayor presencia: Cartagena, Carmen de Bolívar, Magangué, María La Baja, Santa Rosa, Monte Cristo y San Jacinto. En Sucre, 123.820; los municipios más afectados: Sincelejo, San Onofre, Corozal, Ovejas, Guaranda, Los Palmitos y Sincé.



## **POBLACIÓN DESMOVILIZADA**

De acuerdo con los Centros de referencia y oportunidades de Montería y Sincelejo hasta hace pocos meses había en los tres departamentos 5.437 desmovilizados.

Estaban distribuidos de la siguiente manera: en Córdoba, 3.800; municipios con mayor número: Montería, Tierralta, Valencia, Montelíbano, Planeta Rica y Cereté. En Bolívar: 521; municipios con mayor número: Cartagena, Magangué, María La Baja, San Juan Nepomuceno y Turbaco. En Sucre: 671; municipios con mayor número: Sincelejo, Corozal, San Marcos, Tolú Viejo, Sampués, San Pedro y Majagual.

## **CAPTACIONES Y CRÉDITOS BANCARIOS**

De acuerdo con la Superintendencia Bancaria, desde el año 2001 hasta el 30 de junio pasado, las captaciones y créditos bancarios del departamento de Córdoba son superiores a los de Sucre, Magdalena, Cesar y Guajira con similares niveles de desarrollo, lo que indica la presencia de dineros ilícitos procedentes al parecer del paramilitarismo y /o narcotráfico.

## **OTROS ASPECTOS**

El sur de la Costa Caribe lo componen poblaciones mestizas, mulatas, negras, indígenas, blancas, grupos provenientes del interior del país, en especial antioqueños y de migraciones internacionales, en especial siriolibaneses. A pesar de algunas similitudes –historia, relieve, poblamiento, concentración de la tierra y manejo del poder político, entre otros- somos diferentes en otros aspectos sociales, económicos y culturales.

Nos caracteriza la pobreza, las desigualdades sociales, los conflictos sociales y armados, zona rural y asentamientos subnormales empobrecidos y con mínimas posibilidades de mejoramiento e institucionalidad local débil.

Los indicadores sociales son menores que el promedio nacional en educación, salud, nutrición, hábitat y empleo.

## PASOS INICIALES DESDE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Los pocos cambios registrados con motivo de las pasadas elecciones nos hacen dudar que la situación mejore para la mayoría de la población de estos departamentos. Gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, por su composición e intereses no creo que hagan mayores cosas; sin embargo hay que presionar, proponer, negociar y adelantar alianzas que permitan alcanzar algunos logros. Al tiempo debemos embarcarnos en planes que nos permitan ampliar y fortalecer todos los tipos de organizaciones comunitarias y sociales, tradicionales y nuevas, con las que contamos en la actualidad. En este sentido me permito presentarles algunas sugerencias que deseo compartir.

- Es indispensable superar la debilidad, dispersión y descoordinación ya tradicionales en las organizaciones comunitarias y no gubernamentales.
- Revisar de manera creativa los objetivos, logros, metodología y perspectivas de las organizaciones con el fin de hacer frente con éxito a la situación actual.
- Continuar, con evaluaciones y ajustes periódicos, los procesos en marcha de las constituyentes comunitarias, laboratorios de paz, programas de desarrollo y paz, redes ciudadanas, iglesias santuarios de paz, observatorios del proceso de negociación y el posconflicto, Plan pastoral de la Diócesis de Montería, agendas ciudadanas de la Contraloría General de la República, biodiversidad y soberanía alimentaria, derechos humanos, gobernabilidad democrática, desarrollo socioeconómico, preservación y recuperación de recursos naturales y el medio ambiente, entre otros, que se impulsan en la región.
- Adoptar planes de desarrollo locales comunitarios y juntas de gobierno que impulsen la democracia, la producción, control social, participación ciudadana, medio ambiente, atención y derechos del niño, adolescentes y jóvenes, los derechos humanos como incremento de oportunidades y capacidades de las personas para realizar el tipo de vida que merecen.
- Impulsar pactos sociales que atiendan y orienten a la región en aspectos claves con participación de instituciones, gremios y autoridades.
- Apoyar la elaboración del Informe regional de desarrollo humano del Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

## FUENTES

- Centro de referencia y oportunidades de Montería y Sincelejo.
- Dane, Censo 2005.
- Información preliminar del equipo que coordina la elaboración del Informe regional de desarrollo humano del Caribe. Cartagena, 2006.
- Mesa de prevención del Sistema de Alertas Tempranas de las Defensorías del Pueblo de Córdoba y Sucre.
- Observatorio del Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Bogotá, 2005.
- Oficina Acción Social de la Presidencia de la República.
- Víctor Negrete Barrera, Justapaz y las Iglesias Santuarios de Paz de Tierralta, Sincelejo y Zambrano. Las Iglesias Santuarios de Paz y el desplazamiento forzado en el sur de la Costa Caribe Colombiana. Montería, 2005.

## El SUR de CÓRDOBA

### ¿cuándo tendrá paz y desarrollo?

**Y**a es suficiente. Han pasado demasiados años y el abandono, los conflictos de diversa índole, la pobreza, la marginalización y la estigmatización continúan en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia, el sur de Córdoba. La historia es larga, dolorosa y desconocida, tal vez esto último ayude a explicar la indiferencia de la mayoría de los cordobeses y el país en general. Es útil entonces explicar un poco los antecedentes de esta situación.

El padre franciscano Joseph Palacios De la Vega en su campaña de evangelización y congregación “de los naturales y libres dispersos en parajes incultos” del San Jorge durante los años 1787 y 1788 dejó consignado en su diario de notas lo difícil y dramático que resultó conformar pueblos con indios indómitos, negros rebeldes, autoridades corrompidas, clérigos indiferentes y contrabandistas. El profesor Gerardo Reichel-Dolmatoff en el prólogo que escribió del Diario de viaje del padre Palacios nos dice que a estos primeros grupos se agregaron después mestizos, mulatos y zambos que formaron poblaciones que no estaban bajo el control de la administración por ausencia de esta. El

mismo profesor nos cuenta que en 1957 en las montañas del alto río San Jorge, en las faldas del cerro Murrucucú y en las cercanías de Uré se encontraban indígenas viviendo en condiciones similares como los vió el padre Palacios. En 1841 el químico alsaciano Luis Striffler, recorrió el Alto Sinú en busca de oro en el Cerro de Higuierón y encontró indígenas, mestizos y aventureros viviendo en condiciones lamentables en medio de selvas exuberantes, pletóricas de encantos.

En 1900 el alto San Jorge todavía era considerado como reino de los negros rebeldes, los indígenas feroces, los maleantes sanguinarios y los colonos mestizos más aventureros, donde las leyes y autoridades de la república no cumplían ninguna función. La lejanía de los centros poblados, lo intrincado de las trochas y lo caudaloso de los cauces de ríos y quebradas, alimentaba y exageraba la realidad. Algunos funcionarios y miembros de las autoridades lo calificaron con el nombre de zona negra por lo aislado y peligroso. En el alto Sinú, aguas arriba de lo que hoy es Tierralta, la esclavitud primero y luego la matrícula, contrato que obligaba a los peones y sirvientes a trabajar indefinidamente en casas y haciendas por supuestas deudas que casi nunca terminaban de pagar, continuaban vigentes.

En 1917 Laura Montoya Upegui, la Madre Laura, comenzó a interesarse por la “vida miserable y pagana” que llevaban los indígenas y negros de Uré y sus alrededores. En su autobiografía cuenta que “el caserío del río Uré que desemboca en el río San Jorge estaba lleno de gentes, los más miserables por dentro y por fuera... tanta mugre, tantas enfermedades que aquello parecía una leprosería. Tan malos olores... en fin, un calor, una nube de zancudos...”

A mediados de la década de 1920 llegaron de España los Misioneros de Burgos con el fin de adelantar labores en el alto San Jorge. En sus informes daban cuenta que “las jornadas son penosísimas y requieren guías veteranos. El terreno es quebrado, las continuas subidas, bajadas y paso de quebradas no impiden que nos deleitemos en la contemplación del paisaje que es hermosísimo. Hay árboles gigantescos en tamaño y altura”. “Los primeros indios que vi en la quebrada de río Verde me llamaron la atención por la carencia de vestidos, la pobreza de sus habitaciones, la mirada triste de sus mujeres, el imperfecto desarrollo de sus niños...”

## El viejo conflicto armado

En 1949 comenzó la época de la Violencia bipartidista. Los más afectados fueron el alto Sinú y el alto San Jorge. Las guerrillas liberales, con amplio dominio en la zona, se desmovilizaron en 1953 y 1959 respectivamente. Sus dirigentes más conocidos fueron Julio Guerra, Mariano Sandón y Evaristo Calonge. Entre 1960 y 1966 continuó la etapa de expansión terrateniente mediante el despojo a sangre y fuego de tierras de pequeños y medianos propietarios así como del Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge. Al final se expandieron algunas haciendas, hubo concentración de tierras y las colonias o pueblos que había levantado el Sindicato desaparecieron del todo. Algunos de ellos eran corregimientos como Centro América, El Caribe, Puerto López y Villa Ma-

toso que quedaba donde está la mina de ferróniquel de Cerro Matoso. Los otros pueblos fueron Palma Amarga, Loma Seca, Puerto Unión, Campamento, Puerto Franco, Danubio, Gallo, Palo Negro y Abejal, entre otros.

Después siguió el nacimiento del Ejército Popular de Liberación EPL en las montañas del alto Sinú y San Jorge en 1967. Desde este momento al área la bautizaron con el nombre de zona roja. Y así, cronológicamente, surgió las FARC en límites con el departamento de Antioquia en 1981, el narcotráfico en 1984, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en 1994, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en 1996, el proceso de negociación Gobierno-AUC entre el 2002-2006 y desde entonces las acciones de los grupos que no se desmovilizaron, los reincidentes y nuevos.

La guerra que libraron las FARC y las AUC ocasionó la desaparición de Barrancón y Yupe en marzo de 1997 y de 15 veredas más en junio de 1998: Yupécito, Quebrada Seca, Santa Cruz, Santa Isabel, Jardín, El Anzuelo, Palestina, Zancón, La Gloria, Puerto Fuerte y las Veredas unidas de los Llanos del Tigre.

## Preocupante la situación actual Pocas veces hemos pasado por la si-

tuación en la que nos encontramos actualmente: el alto número de homicidios, entre ellos muchos desmovilizados que viene sucediendo desde el año anterior, los distintos grupos armados ilegales que están operando y el desconocimiento que existe sobre ellos, las deficiencias de los proyectos productivos, de vinculación laboral y de capacitación, el narcotráfico, la erradicación de cultivos de uso ilícito y el escaso apoyo a la recuperación de la agricultura campesina tradicional, el aumento de afectados por minas queiebrapatas, los desplazamientos que no cesan, la poca atención a las víctimas y desplazados en general, el incremento de la violencia doméstica ocasionado por la mayoría de los desmovilizados, el rechazo a los desmovilizados, la falta de estudios e investigaciones sobre estos temas. Fuera de estos hay dos que conocí la semana anterior: 1) El representante de Unicef en Colombia aseguró que en el departamento 15 de cada 100 niños padecen desnutrición, cifra por encima del Chocó y del promedio nacional que es de 12. 2) El programa Familias en Acción de la Presidencia de la República atiende a menores de edad en nutrición y educación primaria y secundaria de familias desplazadas por la violencia y estrato 1 del Sisben. En Córdoba tienen registradas 10.877 familias desplaza-

das y 129.985 familias de estrato 1. Este último el más alto del país. En cuanto a los municipios del sur, en total tienen inscritas 5.020 familias desplazadas y 19.273 familias en estrato 1.

## ■ ¿Qué podemos y debemos hacer?

El gobierno nacional hace presencia en la zona a través de la fuerza pública, ejército y policía, y los programas Familias en Acción, Juntos para superar la extrema pobreza, el Centro de Coordinación de Acción Integral y lo que gestionen las alcaldías de cada municipio. Para las necesidades de la zona estos recursos son totalmente insuficientes. Es necesario agregar nuevas iniciativas.

Mi propuesta en este sentido es la siguiente:

Más vinculación con las organizaciones de cooperación internacional. En Córdoba por lo general contamos con la presencia de las siguientes organizaciones internacionales: ONU, OEA, CICR, ACH, OIM, PMA, Oxfam, CHF, Médicos Sin Fronteras, Visión Mundial, Caritas Alemana, Acnur, Unicef, Fupad. Las administraciones gubernamentales del departamento poco se han interesado por la ayuda que prestan y el conocimiento que poseen estas organizaciones, no muestran interés en coordinar programas ni solicitar su presencia por más tiempo. La gobernación debe convocarlas para agradecerles, conocer a fondo los programas que llevan a cabo, coordinar con ellas, solicitar nuevos programas o ampliación de los que ejecutan y asesorías, adelantar análisis sobre la situación de la zona, invitar a participar a nuevas organizaciones y a regresar a las que se hayan retirado temporalmente, acordar planes de acción integrales. Considerar a los municipios del sur como zona especial de atención. Por los antecedentes y la situación actual los municipios del sur deben ser considerados zona especial de atención. Con base en diagnósticos se definirían prioridades, programas y acciones en cada una de las áreas de trabajo. Un equipo coordinador se encargaría del funcionamiento de todo el Plan .

Fortalecer la institucionalidad y las organizaciones de la comunidad. Es fundamental fortalecer las corregidurías, alcaldías, justicia, personería, Sistema de alertas tempranas de la Defensoría del pueblo, concejos municipales y en fin, las distintas instancias del gobierno y el Estado. Asimismo promover y organizar los distintos grupos y sectores de la comunidad, fomentar las redes



de participación y control, capacitar en liderazgo y organización, entre otras. Recuperar a comunidades que tradicionalmente han vivido el conflicto armado. En la zona son numerosos los pueblos, veredas y corregimientos, que han padecido de manera ininterrumpida el conflicto armado originado por la guerrilla liberal, la guerrilla de izquierda, las autodefensas y los grupos con nuevas denominaciones. Por ejemplo: Santafé Ralito, Tierradentro, Pica Pica, Batata, Callejas, Villa Nueva, El Palmar, Puerto Nuevo, Juan José, San Francisco del Rayo, Sitio Nuevo, entre otros. Entender la vida y situación de estas comunidades nos aportaría conocimientos importantes para intentar su recuperación. Con un plan acordado entre las instituciones del gobierno en sus diferentes instancias, organizaciones internacionales y comunidad en general trataríamos de generar los cambios que sean necesarios para una mejor forma de vida.